

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Tesis Licenciatura en Sociología

**Desigualdad e inclusión financiera:
comparación de iniciativas en Paraguay y Uruguay**

María Ángela Maino Jourdan

Tutor: Rafael Rey

2015

Resumen

El análisis de los debates contemporáneos de vulnerabilidad y exclusión social plantea la paradoja del desarrollo económico de las últimas décadas. A pesar de que las economías capitalistas son capaces de generar niveles de crecimiento de riqueza exponenciales, persisten al mismo tiempo altos niveles de pobreza y sus mecanismos de reproducción que mantienen desigualdades sociales.

Lograr una sociedad inclusiva implica trabajar en la inclusión social y económica de la población. Entendida la inclusión financiera como una dimensión más de la inclusión social, este trabajo tiene como objetivo analizar la desigualdad en los perfiles sociodemográficos de la población y su relación con la inclusión financiera en Paraguay y Uruguay.

Partiendo de las solicitudes de crédito al consumo en el marco de las iniciativas de inclusión financiera de dos entidades de los países analizados se desarrolla un análisis discriminante. Este estudio busca identificar los patrones de desigualdad entre las personas que solicitan préstamo por primera vez, comparando aquellos que acceden al préstamo y aquellos que son rechazados. Como parte del análisis se estudia la desigualdad de género, edad, lugar de residencia, educación y ocupación en ambas poblaciones. Luego, se clasifica a los solicitantes de préstamos al consumo en términos sociodemográficos con el fin de analizar la relación grupo sociodemográfico-inclusión financiera. Finalmente, se comparan los modelos de inclusión y su impacto en los distintos grupos vulnerables de la población general.

Del análisis se concluye que, por un lado los procesos de inclusión financiera analizados amplían la cantidad de personas que se incorporan al sistema financiero formal y revierten la situación de desventaja comparativa de algunos grupos típicamente desfavorecidos. Por otro lado se constata que en términos generales, se reproducen los mecanismos de exclusión social observados en el ámbito socio económico laboral. Es decir, los grupos más vulnerables tienen menores niveles de inclusión que el resto de la población. Esto genera un desplazamiento de la curva de inclusión a un nivel mayor, pero no modifica sustancialmente los procesos que la generan.

Abstract

Economies under the capitalist economic system are able to generate great wealth but they also condone high poverty levels and increasing inequality. Hence, current debates on vulnerability and social exclusion are forced to tackle this paradox. This research project addresses this issue by studying one of the dimensions of social inclusion: financial inclusion.

In order to attain an inclusive society it is imperative to work towards social and economic inclusion of the population as a whole. Moreover, it is important to understand which groups are excluded from the financial system and face greater credit constraints than others. With this aim in mind, this research project analyses which are the sociodemographic profiles that face greater financial exclusion and if these are the same in Uruguay and Paraguay.

Both in Uruguay and Paraguay, there are financial entities that have the objective of promoting financial inclusion. Thus, it is possible to perform a discriminant analysis of credit application forms and identify inequality patterns among the applicants. Through the credit applications it is possible to study gender, age, place of residence, education level and occupation among those applicants that were rejected and those that received a credit. Then, the project is able to compare the different inclusion models and their impact on vulnerable groups.

The project finds that the new regimes established in the studied financial entities favoured the inclusion of groups that are typically excluded. Hence, it is possible to have a positive impact on vulnerable groups of the society through inclusion policies in financial institutions. However, the effect is lower on the groups that face higher social exclusion. Thus, the financial exclusion initiatives that were implemented in Uruguay and Paraguay enabled an upward shift of the inclusion curve but did not change its slope.

Palabras clave

Desigualdad, exclusión, pobreza, vulnerabilidad, inclusión financiera, análisis discriminante.

Inequality, exclusion, poverty, vulnerability, financial inclusion, discriminant analysis.

Tabla de contenido

1. Introducción	1
1.1. Pregunta problema	2
1.2. Objetivo general.....	2
1.2.1. Objetivos específicos	3
1.3. Hipótesis	3
1.4. Metodología	3
2. Marco Teórico	5
2.1. Pobreza, Desigualdad, Vulnerabilidad y Exclusión Social.....	5
2.2. El Panorama de América Latina	8
2.2.1. Niveles de Desigualdad	8
2.2.2. Grupos Vulnerables	13
2.3. Inclusión Financiera.....	16
2.3.1. Sobre la Exclusión en el Mercado de Crédito	18
2.3.2. Acceso y Uso de Productos Financieros	19
3. Situación General en los Países Estudiados	22
3.1. Descripción de la Población	22
3.1.1. Población Paraguaya.....	22
3.1.2. Población Uruguaya	25
3.2. Inclusión Financiera.....	28
3.2.1. Inclusión Financiera en Paraguay.....	29
3.2.2. Inclusión Financiera en Uruguay.....	30
4. Las Entidades Emisoras de Crédito.....	33
4.1. Caso de Estudio 1: Paraguay.....	33
4.2. Caso de Estudio 2: Uruguay	34
4.3. Observaciones Generales	35
5. Diseño Metodológico	38

5.1.	Modelo Logístico.....	38
5.2.	Partición en muestras de Desarrollo y Prueba	40
5.3.	Importancia de las variables	40
5.4.	Indicadores de Poder Discriminante	41
5.4.1.	Curva COR	41
5.4.2.	Kolmogorov-Smirnov (K-S).....	42
5.4.3.	Coeficiente de Gini.....	42
6.	Análisis Descriptivo	43
6.1.	Características sociodemográficas	43
6.2.	Nivel de Inclusión	45
7.	Modelos Explicativos.....	48
8.	Conclusiones	54
	Bibliografía.....	57

1. Introducción

La temática central de este trabajo es la desigualdad en los perfiles sociodemográficos de la población y su relación con las iniciativas de inclusión financiera, abordada desde un análisis comparativo entre Paraguay y Uruguay.

Lograr una sociedad con menor inequidad implica trabajar en la inclusión social y económica de la población. Entendiendo la inclusión social como un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven (Atkinson et al, 2002). En un ámbito de inclusión económica que requiere un crecimiento inclusivo que genere oportunidades, promueva el empleo y la igualdad de accesos, en un contexto de estabilidad macroeconómica.

La inclusión financiera se analiza en este trabajo como una dimensión más de la inclusión social, por tanto se busca entender sus características y pautas de funcionamiento intentando así aportar conocimiento sobre la desigualdad de oportunidades a las que se enfrentan algunos grupos poblacionales.

El fortalecimiento del acceso y uso de los servicios financieros formales es una prioridad que reconocen los gobiernos y legisladores de todo el mundo, así como distintas entidades financieras, organismos no gubernamentales y asociaciones civiles, que coinciden en que mayores y mejores niveles de inclusión financiera están asociados a un mayor desarrollo económico y social. De ahí la trascendencia que se le asigna a que los servicios sean lo suficientemente inclusivos para beneficiar y colmar las expectativas y requerimientos de todos los segmentos poblacionales.

Al analizar cómo diversos instrumentos de ahorro, crédito, transacciones, aseguramiento y pagos pueden mejorar el bienestar de los hogares, se ha observado que, en términos generales, la mejora en el acceso para las familias está dirigido a reducir el descalce (entendido como la imposibilidad de contar con el dinero necesario en tiempo y forma) entre la distribución temporal de las necesidades de gasto y consumo y los flujos de ingresos.

En América Latina, si bien muchos de los hogares de la región no tienen una cuenta en alguna institución financiera, otros tantos hogares manifiestan ahorrar, lo que muestra una constante sustitución de parte del consumo presente por consumo futuro.

“... aunque los niveles de ahorro y demanda de crédito pueden ser diferentes para distintos estratos de ingreso, prácticamente todos los hogares utilizan de una u otra forma algún mecanismo para diferir o adelantar su consumo en el tiempo... todos los hogares, incluso los más pobres, toman decisiones de consumo, ahorro e inversión, y para ello utilizan tanto mecanismos formales como informales.”(CAF, 2011: 258)

Uno de los objetivos de la inclusión financiera es extender el acceso al ahorro, al crédito, transacciones, sistema de pagos y los servicios financieros en general, a todos los niveles socioeconómicos de la población. Un mayor acceso al sistema financiero formal permitiría a los hogares acceder a mejores condiciones de financiamiento al consumo, y a las empresas potenciar sus niveles de actividad.

Asimismo, promover la formalización de unidades económicas y una adecuada canalización del ahorro hacia la inversión, permitiría avanzar en la focalización de la política tributaria, con mayor impacto en los objetivos de equidad. Un elevado nivel de evasión impositiva y una alta participación de la economía informal en general se asocian con una baja bancarización.

1.1. Pregunta problema

¿Las características sociodemográficas de las personas: género, edad, lugar de residencia, ocupación, son factores explicativos de las oportunidades de acceso al crédito? ¿Las desigualdades sociales, presentes al interior de las sociedades, se expresan en términos equivalentes al considerar el acceso al crédito? ¿Qué características comparten Paraguay y Uruguay en términos de acceso al crédito y de inclusión financiera?

1.2. Objetivo general

Identificar patrones de desigualdad entre las personas que solicitan por primera vez préstamos al consumo, comparando entre quienes acceden al mismo y quienes son rechazados en dos países, Paraguay y Uruguay.

1.2.1. Objetivos específicos

- a) Caracterizar la desigualdad de género, edad, lugar de residencia, educación y ocupación, identificando los grupos vulnerables en ambas poblaciones,
- b) Clasificar a los solicitantes primarios¹ de préstamos al consumo en términos sociodemográficos, identificando los grupos con mayores niveles de exclusión en el acceso al crédito,
- c) Analizar las relaciones entre los grupos vulnerables y la inclusión financiera, y
- d) Comparar las desigualdades de inclusión financiera con las desigualdades de la población general.

1.3. Hipótesis

Las desigualdades de género, edad, lugar de residencia y tipo de empleo, contribuyen a la desigual distribución de oportunidades en el acceso al crédito.

La inclusión financiera, como una dimensión de la inclusión social, reproduce los patrones de desigualdad de oportunidades de las sociedades estudiadas.

1.4. Metodología

El estudio de los niveles de desigualdad en relación a la inclusión financiera se realiza a través un análisis discriminante. El universo de estudio son las solicitudes de crédito al consumo primarias tomadas, en el marco de las iniciativas de inclusión financiera de dos entidades financieras de Paraguay y Uruguay. La variable a explicar es solicitud con y sin crédito otorgado.

Finalmente se realiza un análisis comparativo de ambos países en relación a la desigualdad de oportunidades y de inclusión financiera.

¹ Se denomina ‘solicitantes primarios’ a aquellas personas que no han tenido productos de crédito anteriores en la entidad.

El trabajo se estructura en 9 capítulos. Luego de la introducción, en el capítulo 2 se detalla el marco teórico utilizado para trabajar los conceptos de desigualdad e inclusión financiera y sus vínculos con la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. En el tercer capítulo se describe la situación general de Paraguay y Uruguay en relación a las características y evolución de la población, así como su situación en términos de inclusión financiera. En el cuarto se presentan las empresas seleccionadas como casos de estudio. El capítulo 5 describe la metodología de análisis, los datos utilizados, las técnicas de análisis y de validación del modelo. El sexto capítulo contiene el análisis descriptivo de las variables sociodemográficas estudiadas y su relación con los niveles de inclusión observados. Continúa el capítulo 7 con la presentación de los resultados de los modelos explicativos. Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones del trabajo.

2. Marco Teórico

2.1. Pobreza, Desigualdad, Vulnerabilidad y Exclusión Social

El análisis de los debates contemporáneos de vulnerabilidad y exclusión social plantea la paradoja del desarrollo económico de las últimas décadas que, teniendo lugar en economías capitalistas capaces de generar riquezas exponenciales, convive con altos niveles de pobreza y mecanismos de reproducción sostenida de desigualdades sociales.

El capitalismo de la primera mitad del siglo XX – caracterizado por los ciclos económicos, vinculados éstos a algunos aspectos de la pobreza, y que espera la reducción de las desigualdades económicas a través del crecimiento a largo plazo y la implementación del estado de bienestar – contrasta con la realidad de las últimas décadas, donde conviven el crecimiento económico y la reproducción de mecanismos de desigualdad y exclusión social.

En este contexto los conceptos de *pobreza* y *desigualdad* amplían y complementan con otros como la *vulnerabilidad* y *exclusión social* (Serna, 2005). En los siguientes apartados se presenta una conceptualización de estos términos y sus mutuas relaciones.

En la aproximación al concepto de *pobreza* desarrollada por Fernández y Longhi (2002) ésta es entendida como una situación que se define en términos *relativos* a la sociedad, y está vinculada a tres aspectos: la *situación distributiva* de recursos, bienes y servicios; la definición de *estilo de vida* entendido como básico; y el finalmente la pobreza como posición dentro de una *estructura social*.

La pobreza como situación distributiva, refiere al acceso limitado a recursos, bienes y servicios disponibles en una sociedad, y que ésta considera deben ser de acceso y uso generalizado y que, por tanto, forman parte del estilo de vida entendido socialmente como básico (Fernández&Longhi, 2002).

El segundo elemento a tener en cuenta es la pobreza como afectación de las capacidades, entendida como las limitaciones en el ejercicio de las capacidades de los individuos de elegir libremente llevar un tipo de vida y otro (Sen, 1996).

Finalmente se postula que la pobreza no deriva de una situación individual sino que es el resultado de la conformación y funcionamiento de la estructura social. Esta perspectiva pone el foco en el análisis macro y se sustenta en las teorías de clases y del estado de bienestar: la raíz de la pobreza radica en la forma en que se estructura la producción y distribución de bienes. Se entiende entonces el concepto de pobreza como una posición en una relación social entre un hogar y una estructura distributiva, donde los pilares del bienestar y el sistema distributivo que son el Estado, el Mercado y la Sociedad interactúan en la conformación de los sistemas de estratificación así como con los niveles, perfiles y tipos de pobreza. En este sentido, el análisis de la pobreza debería contemplar un nivel micro-sociológico – relativo al análisis de los hogares, y otro macro-sociológico – basado en el análisis de las fuentes de bienestar.

“Menores o mayores niveles de pobreza dependen así de cómo el sistema de estratificación a través de las tres esferas institucionales señaladas distribuye o dota a los hogares –especialmente en los estratos inferiores- de recursos capacidades y recompensas.” (Fernández&Longhi, 2002: 9)

El concepto de pobreza suele presentarse vinculado al concepto de **desigualdad**, especialmente con la desigualdad en la distribución del ingreso. Si bien hay una relación entre ambos conceptos – en el sentido de que al incrementarse uno podría incrementarse el otro (los países de América Latina con mayores niveles de desigualdad también son los que presentan mayores niveles de pobreza), no son términos intercambiables.

En este trabajo tomamos como referencia el concepto de desigualdad como la dispersión de una distribución de cualquier atributo de bienestar de la sociedad (renta, consumo, salud, educación, etc.) (Terceiro, 2006).

Algunas líneas de análisis (Serna, 2005) plantean una re-conceptualización de la pobreza incorporando el concepto de **vulnerabilidad** social, donde destaca la heterogeneidad de situaciones en torno a la pobreza económica y la capacidad de las personas y los grupos sociales de movilizar sus activos y recursos de capital social. El reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones socioeconómicas habilitó el pasaje de una visión unidireccional, que entiende e identifica la pobreza en base a la insuficiencia de ingresos, a una visión multidimensional de la vulnerabilidad social.

Un ejemplo de esta perspectiva es la que apunta a la capacidad de las personas de movilizar activos y aprovechar las estructuras de oportunidades para alcanzar niveles básicos de bienestar social. Según este enfoque la estructura de oportunidades se basa en tres componentes: el Estado, el mercado y la sociedad civil, que permiten la movilización de activos y capital social que, al combinarlos, puede mejorar la situación de vulnerabilidad de la persona o grupo social (Katzman, 1999).

También se postula la sustitución del término marginalidad por el de *exclusión* social, presentándolo como una búsqueda de comprensión multidimensional de los procesos y mecanismos que reproducen las desigualdades sociales. Implica reconocer múltiples planos de desigualdad que conviven y se reproducen en distintas direcciones generando diversas situaciones de exclusión social. Busca identificar distintos procesos de marginación como la precarización, flexibilización e informalidad del empleo, la segregación urbana e hiperurbanización, desigualdades de género y generacional, así como desigualdades socioculturales vinculadas a la discriminación étnica y racial (Serna, 2005).

Alude a las dimensiones económica, institucional y cultural, así como destaca un carácter dinámico donde la exclusión es un proceso donde el acceso a algunos cambios económicos, institucionales y culturales está restringido para algunos individuos y sectores de la sociedad.

“La pobreza se refiere tradicionalmente a la dimensión económica de carencia material que no permite la satisfacción de las necesidades básicas y la obtención de un nivel de vida considerado como aceptable (que, por lo general, se traduce en el nivel de ingresos). En cambio, la exclusión social se define como un concepto multidimensional, que considera una multiplicidad de aspectos jurídicos, económicos, culturales. Se añade luego la categoría de vulnerabilidad, para hacer referencia a grupos con determinadas características que los tornan más débiles para su integración económica.” (Serna, 2005: 11)

Desde una teoría general de capitalismo Figueroa (1996) desarrolla el concepto de exclusión social como una forma de explicar la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo. Las sociedades capitalistas subdesarrolladas integran a los grupos sociales de acuerdo a sus necesidades que se articulan mediante mecanismos de inclusión/exclusión funcionales a su dinámica. La exclusión en el acceso a activos sociales como el acceso al empleo, crédito, seguros, política, redes sociales y cultura, puede derivar en la segmentación de grupos. En este sentido el concepto de exclusión social se utiliza para describir modelos emergentes de desventajas sociales (Sánchez Tam, 2003).

“Es una noción compleja que puede usarse para denotar, por un lado, una situación o proceso experimentado por los individuos, llámese su marginalización de la sociedad por privación económica y aislamiento social; y por otro lado una situación o proceso que ocurre en las sociedades, llámese la fragmentación de las relaciones sociales, el surgimiento de nuevos dualismos y la ruptura de la cohesión social.” (Figueroa, 1996: 11)

En este enfoque también hay una distinción entre interacción social desde la organización económica, el ordenamiento político-institucional y la cultura, al tiempo que plantea que la exclusión en cierta dimensión puede ser contrarrestada por modalidades de integración en otra dimensión, aunque también pueden interactuar negativamente unas sobre otras.

2.2. El Panorama de América Latina

En los siguientes apartados se desarrolla en primer lugar una taxonomía que nos permite identificar, a través de un indicador comparativo, el nivel de desigualdad de los países de América Latina en relación a la pobreza, la distribución de ingreso y las pautas de transición demográfica. Luego se describen algunos indicadores relevantes para este trabajo con el objetivo de identificar los grupos socialmente vulnerables en la región.

2.2.1. Niveles de Desigualdad

Según el reporte 2012 del panorama social de la CEPAL América Latina ha tenido un crecimiento económico sostenido en el período 2002-2012 con un fuerte impacto en la disminución de la pobreza y la indigencia, se registraron avances en la distribución de la riqueza y en el aumento del empleo, no obstante se mantiene una distribución desigual del ingreso y al 2012, con 167 millones de pobres y 66 millones de indigentes, era el continente más desigual del mundo (CEPAL, 2012).

En un contexto de crecimiento del PBI, una evolución favorable del empleo en la región, reducción de las tasas de desempleo, mantenimiento de los ingresos reales acompañado de una baja tasa de inflación, las proyecciones para los próximos años indican que se mantiene la tendencia a la baja tanto de la pobreza como de la indigencia, aunque con un ritmo más moderado del observado en los últimos períodos.

Pobreza e Indigencia

La pobreza está asociada a la desigualdad, al incrementar la primera podría incrementarse la segunda, pudiendo variar, cada indicador y la relación entre ambos, a lo largo del tiempo (Fernandez & Longhi, 2002).

Los países latinoamericanos se ven afectados por la **pobreza** y por la **indigencia** de manera distinta, pudiendo ser clasificados de la siguiente manera (CEPAL, 2012):

- a) *niveles bajos*, con tasas inferiores o iguales a la media del subcontinente (Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Venezuela),
- b) *niveles medios*, con tasas de pobreza que varían de 34% a 46% (Bolivia, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y El Salvador), y
- c) *niveles altos*, con tasas de pobreza iguales o superiores al 50% y de indigencia mayores de 28% (Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay).

Cabe destacar que entre 2010 y 2011 se observaron avances significativos en las tasas de pobreza de 7 países: Paraguay (con la mayor variación del grupo, -5.2 puntos), Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay (con la menor variación, -1.9 puntos). En esos países, también hubo una notable disminución de la indigencia (CEPAL, 2012).

A pesar de la evolución en la reducción de la pobreza de las últimas décadas, el perfil de las personas pobres no ha variado significativamente desde fines de los 90. No obstante se vislumbran algunos cambios en las tendencias demográficas de la región. Si bien la composición por sexo de los hogares pobres es similar a la de 1999, ha aumentado el porcentaje de personas que viven en hogares encabezados por mujeres. El aumento de la edad promedio de la población tienen incidencia sobre el perfil y el tamaño de los hogares pobres, observándose una disminución del porcentaje de menores entre la población indigente, aumentando levemente el peso relativo de la población adulta en este grupo. En términos educativos, el incremento en los niveles de escolarización en la población pobre, todavía no se acompaña de mejoras sustanciales en las tasas de conclusión de educación secundaria en este grupo.

“A su vez, cabe mencionar que el 29% de la población vulnerable desde el punto de vista de los ingresos tenía en 2011 estudios superiores incompletos o completos, cifra 10 puntos porcentuales mayores que en 1999. Esto último significa no solo que el acceso a la educación superior no es condición suficiente para eludir el riesgo de caer en la pobreza. Sugiere también que para una parte de la juventud los mayores conocimientos adquiridos no se plasman en movilidad

socio ocupacional ni en una inserción productiva oportuna, lo que genera frustración de expectativas y, posiblemente, mayor descontento ciudadano.”(CEPAL, 2012: 21)

Concentración de Ingreso

La desigualdad en términos de distribución del ingreso sigue siendo alta, para los países con información disponible, el 10% más rico de la población recibe el 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe el 15% (CEPAL, 2012).

Teniendo en cuenta la **concentración del ingreso** podemos dividir a los países de la región en 4 grupos:

- a) *concentración muy alta*, 40% de los ingresos para los más ricos y entre 11 y 15% para los más pobres (Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y la República Dominicana),
- b) *concentración alta*, similar concentración para los pobres que el grupo a, pero menor concentración en el decil superior (Bolivia, Costa Rica y Panamá),
- c) *concentración media*, 17% de concentración en los más pobres y al alrededor del 30% de los más ricos (Argentina, el Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y el Perú), y d) *concentración baja*, 20% en el decil más bajo y 23% en el decil más alto de ingresos.

Transiciones Demográficas

En la región también destaca la importancia de las transiciones demográficas en términos de crecimiento y estructura de la población, así como en sus consecuencias económicas y sociales. Durante el siglo XX las distintas trayectorias de los países en términos de disminución de la mortalidad y la fecundidad, junto a la creciente urbanización y crecimiento acelerado de la población, han acentuado los desequilibrios poblacionales y las desigualdades socioeconómicas. Las transiciones demográficas, en general han sido tardías y aceleradas, y se han producido en distintos momentos en cada país (Cosío Zavala, 2014).

Los modelos de transición de la **mortalidad** de la región se pueden clasificar en 4 grupos según la esperanza de vida al nacer para las mujeres:

- a) *transiciones avanzadas*, 80 años (Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay),
- b) *transiciones medias*, más de 75 años (Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador y Venezuela),

- c) *transiciones en curso*, cerca de 74 años (Guatemala, Honduras, Paraguay), y d) *transición inicial*, menos de 70 años (Haití y Bolivia), este grupo si bien empieza a registrar una disminución de la mortalidad, la mortalidad infantil es todavía relativamente elevada.

Por su parte, los modelos de transición de la **fecundidad** según la cantidad de hijos por mujer clasifican a los países en 5 grupos:

- a) *transición muy avanzada*, 1.5 hijos por mujer (Cuba),
- b) *transición avanzada*, entre 1.9 y 2.3 hijos por mujer (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay),
- c) *transición mayoritaria*, entre 2.3 y 2.6 hijos por mujer (Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador y Venezuela),
- d) *transición moderada*, entre 2.8 y 3.3 hijos por mujer (Honduras, Nicaragua y Paraguay), y
- e) *transición incipiente*, entre 3.5 y 4.2 hijos por mujer (Bolivia, Guatemala y Haití).

En la comparación de las clasificaciones de transición se observa una alta correlación entre los modelos, al tiempo que muestran una fuerte relación con los niveles de pobreza y con las desigualdades socioeconómicas. Las transiciones “avanzadas” se dan en países de inmigración europea y alto crecimiento económico. Las transiciones “medias” corresponden a países con un alto crecimiento demográfico y económico durante el siglo XX. Por su parte, las transiciones “moderadas e incipientes” se observan en los países más pobres. Los diferentes niveles de transición también se observan al interior de los países, donde las transiciones demográficas avanzadas se dan fundamentalmente entre las categorías sociales más privilegiadas, más escolarizadas y más urbanizadas. Mientras que las transiciones retardadas están vinculadas a las categorías más pobres de la población (Cosío Zavala, 2014).

Nivel de Desigualdad Comparado

Tomando los resultados de las clasificaciones de países por nivel de desigualdad en términos de pobreza e indigencia y concentración del ingreso, y el nivel alcanzado en el proceso de transición demográfica, se genera una nueva clasificación que consolida en una única variable el **nivel de desigualdad de los países** (Tabla 1: Nivel de Desigualdad por País).

En el primer grupo, de *nivel de desigualdad alto*, se encuentran los países con alto nivel de desigualdad en términos de pobreza - indigencia y distribución del ingreso y retraso relativo

en términos de transiciones demográficas (Guatemala, Honduras y Paraguay); también se incluye a Nicaragua, Colombia y República Dominicana con un alto nivel de desigualdad en pobreza o en distribución del ingreso, y un estado intermedio en relación a la transición demográfica.

En el *nivel de desigualdad medio* se agrupan los países con nivel medio en ambas dimensiones de desigualdad, que asimismo están en un estado medio de transición demográfica, es el caso de Bolivia, Ecuador, El Salvador y México. En el mismo grupo se incluye a aquellos países como Panamá, Brasil, Chile y Costa Rica que, si bien están bien posicionados en relación a los bajos niveles de pobreza e indigencia que han logrado, tienen una alta concentración del ingreso.

Finalmente, el *nivel de baja desigualdad* está conformado por los países de baja desigualdad en el nivel de pobreza y un nivel de concentración del ingreso medio (Perú y Argentina) o bajo (Venezuela y Uruguay). En este grupo, el avance en términos de transición demográfica es medio o avanzado.

Cuba y Haití no se agrupan ya que sólo se cuenta con los indicadores de transición demográfica, muy avanzada para el primero y en un estado inicial para el segundo.

Tabla 1: Nivel de Desigualdad por País

Nivel Desigualdad	País	Nivel Pobreza/ Indigencia	Concentración Ingreso	Transición Mortalidad	Transición Fertilidad
Alto	Guatemala	c. Alto ▼	d. Muy Alta ▼	c. En Curso ▼	e. Incipiente ▼
	Honduras	c. Alto ▼	d. Muy Alta ▼	c. En Curso ▼	d. Moderada ▼
	Paraguay	c. Alto ▼	d. Muy Alta ▼	c. En Curso ▼	d. Moderada ▼
	Nicaragua	c. Alto ▼	b. Media ▬	b. Media ▬	d. Moderada ▼
	Colombia	b. Medio ▬	d. Muy Alta ▼	b. Media ▬	c. Media ▬
	República Dominicana	b. Medio ▬	d. Muy Alta ▼	b. Media ▬	c. Media ▬
Medio	Bolivia	b. Medio ▬	c. Alta ▬	d. Inicial ▼	e. Incipiente ▼
	Ecuador	b. Medio ▬	b. Media ▬	b. Media ▬	c. Media ▬
	El Salvador	b. Medio ▬	b. Media ▬	b. Media ▬	c. Media ▬
	México	b. Medio ▬	b. Media ▬	b. Media ▬	c. Media ▬
	Panamá	a. Bajo ▲	c. Alta ▼	b. Media ▬	c. Media ▬
	Brasil	a. Bajo ▲	d. Muy Alta ▼	b. Media ▬	b. Avanzada ▲
	Chile	a. Bajo ▲	d. Muy Alta ▼	a. Avanzada ▲	b. Avanzada ▲
	Costa Rica	a. Bajo ▲	c. Alta ▼	a. Avanzada ▲	b. Avanzada ▲
Bajo	Perú	a. Bajo ▲	b. Media ▬	b. Media ▬	c. Media ▬
	Argentina	a. Bajo ▲	b. Media ▬	a. Avanzada ▲	b. Avanzada ▲
	Venezuela	a. Bajo ▲	a. Baja ▲	b. Media ▬	c. Media ▬
	Uruguay	a. Bajo ▲	a. Baja ▲	a. Avanzada ▲	b. Avanzada ▲
	Sin Definir	Haití			d. Inicial ▼
	Cuba			a. Avanzada ▲	a. Muy Avanzada ▲

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CEPAL (2012) Y COSIO ZAVALA (2014).

2.2.2. Grupos Vulnerables

En América Latina la desigualdad social de la población se observa en diferentes temáticas (género, edad, educación, ocupación, lugar de residencia, raza, etc.). Estas desigualdades permiten identificar ciertos grupos sociales en especial condición de vulnerabilidad, y que por tanto, están expuestos a diferentes grados de exclusión en ciertas esferas de la vida social (acceso al mercado laboral, a la educación formal, a los servicios de salud, al crédito, etc.).

En los siguientes apartados se describe la situación de desigualdad en relación al género, la edad, el lugar de residencia, ocupación y educación, para luego presentar una agrupación de estas dimensiones por nivel de vulnerabilidad y principales ámbitos de exclusión.

Género

Un abordaje de la desigualdad se centra en la inequidad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente en las asimetrías en el ámbito social, económico, político y cultural. Siguiendo el enfoque de la temática planteado por Batthyány (2014), entendemos el concepto de género como el conjunto de normas, reglas, costumbres y prácticas a partir de las cuales las diferencias biológicas entre varones y mujeres se traducen en diferencias socialmente construidas.

Las estadísticas de género buscan contar con información sobre las posiciones relativas de hombres y mujeres y las inequidades de acceso a las oportunidades de ambos sexos. El análisis las estadísticas del mercado laboral en América Latina, a través de indicadores de tasa de ocupación, actividad, empleo, desempleo y sus relaciones con el nivel educativa, colocan a las mujeres en una situación de desventaja comparativa en término de acceso y calidad de oportunidades laborales.

Entre las explicaciones que se han ensayado para las diferencias del comportamiento en el mercado laboral de hombres y mujeres se encuentra el patrón reproductivo y los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado puede explicar en parte su menor predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades en comparación con los varones. A lo que se suma el des-estímulo que puede implicar que el mercado laboral no valoriza de igual forma el desempeño y los años de escolaridad alcanzados en hombres y mujeres, para las mujeres rinde menos que para los hombres (SIG-INMUJERES, 2013).

Lugar de residencia y Edad

Por su parte, el análisis de la desigualdad por rango de edad sitúa a los jóvenes en una situación de especial vulnerabilidad, casi la mitad de los pobres son menores de 17 años. Se observa, como fenómeno genérico de la región, las bajas tasas de actividad de los jóvenes, lo cual

“... no debe leerse necesariamente como algo negativo. La situación deseable es que los más jóvenes se dediquen a estudiar y luego se inserten al mercado laboral en empleos de calidad. Por el contrario, elevadas tasas de actividad podrían implicar que los más jóvenes, por razones de necesidad, se insertan de forma temprana al mercado laboral en empleos de mala calidad y abandonan los estudios.”(Calvo, 2014: 32)

Para el grupo de jóvenes entre 18 y 24 años las tasas de actividad y empleo son mayores para quienes tienen niveles educativos secundarios que aquellos con niveles terciarios.

La diversidad de modelos demográficos no sólo se observa entre países, también se ve en el interior mismo de las sociedades. Las diferencias de ritmo en las transiciones demográficas separan a las poblaciones en grupos diferenciados, donde es posible identificar el surgimiento de fronteras sociales y una reducción en la interacción entre habitantes de un lado y otro de la frontera, que resultan en exclusión social manifestada a través de mecanismos de segregación residencial y educativa.

En el 2011 la pobreza en las zonas rurales de Latinoamérica representaba más del doble de la pobreza urbana y la indigencia era cuatro veces más importante que en las zonas urbanas. Las poblaciones rurales son, por tanto, las más afectadas por la pobreza extrema. La urbanización registrada en las últimas décadas ha migrado la mayor representación de la pobreza del medio rural a la ciudad, no obstante, la pobreza rural disminuye más lentamente que la urbana (Cosío Zavala, 2014).

En las zonas con menor poder adquisitivo, las tasas de actividad de los jóvenes son mayores a las observadas en las zonas de mayor poder adquisitivo. Una de las explicaciones propuestas para este fenómeno está relacionado con el temprano ingreso al mercado laboral de estos jóvenes para complementar los ingresos del hogar (Calvo 2014).

Ocupación y Educación

A nivel educativo, en América Latina la mitad de los adultos (entre 25 y 65 años de edad) en situación de indigencia no ha completado la educación primaria, en contrapartida, las personas pobres que completaron la educación superior es muy reducida.

También hay diferencias en relación al género, mientras que los hombres ocupados representan más de la mitad de los hombres pobres, para las mujeres este valor está muy por debajo, ya que la mayoría no participa en el mercado laboral.

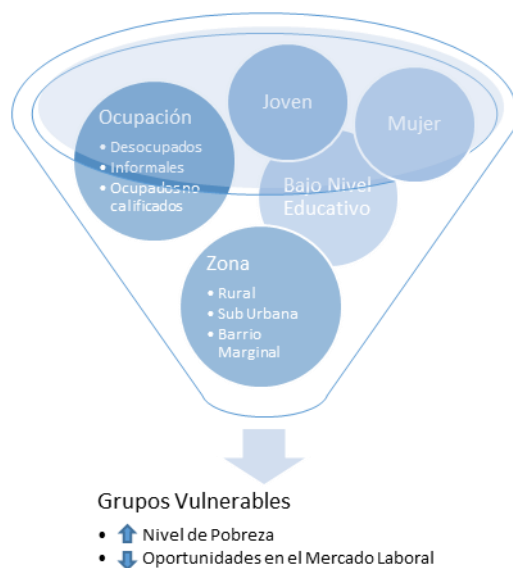
Es importante tener en cuenta que, si bien los ocupados en situación de indigencia trabajan mayoritariamente por cuenta propia y menos de un tercio lo hace como empleado, en el resto de las categorías de la pobreza la categoría que predomina es la de empleado, lo cual indica que ser empleado no anula el riesgo de caer en la pobreza. Asimismo, la situación de las mujeres es más precaria, ya que la proporción de trabajadoras familiares sin remuneración, al igual que las ocupadas en servicio doméstico, es muy alta.

Hay una correlación positiva entre la edad de los ocupados y su nivel de ingreso, así como entre los ingresos y el nivel educativo. En los primeros deciles de ingresos predominan los trabajadores por cuenta propia, el servicio doméstico y los trabajadores familiares no remunerados, ocupados no calificados y que desempeñan tareas agrícolas. A medida que avanzamos en el análisis de los grupos de niveles de ingreso medio, notamos que aumenta la participación de asalariados, oficiales y operarios. En tramos más altos de ingresos aumenta la proporción de altos directivos, profesionales y técnicos, así como empleados de oficina (CAF, 2014).

Grupos Vulnerables

De lo antes expuesto podemos identificar como grupos poblacionales en especial situación de vulnerabilidad en relación a la pobreza y a las oportunidades en el mercado laboral, tanto en el acceso, como la calidad y nivel de ingreso esperado, a: las mujeres, los jóvenes, residentes de zonas rurales, sub urbanas y urbanas de barrios marginales, personas con bajo nivel educativo y desocupados, trabajadores informales y ocupados no calificados.

Gráfico 1: Grupos Vulnerables



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BATTHYÁNY (2014), CALVO (2014) Y COSIO ZAVALA (2014).

2.3. Inclusión Financiera

Durante el 2010 el Grupo de los 20 (G20) países estableció un plan de acción para la inclusión financiera, reconociendo la importancia de los servicios financieros para mejorar los medios de vida de los hogares pobres y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que frecuentemente son los motores del empleo y crecimiento económico.

Algunas definiciones de inclusión financiera la describen como:

“... el acceso y uso de la población aún no atendida a productos y/o servicios financieros de calidad, brindados bajo un marco regulatorio apropiado, que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida” (ASBA, 2012:7)

Otros ven la inclusión financiera como un concepto que...

“... incorpora tres elementos estructurales: i) acceso y uso de productos de ahorro, crédito y servicios transaccionales, ii) educación financiera y iii) protección al consumidor.”(ASOBANCARIA, 2012: 5)

Tomando como ejemplo dos de las tantas definiciones de inclusión financiera, en este documento nos centraremos en los elementos iniciales que comparten estas definiciones: *el*

acceso y uso de productos financieros a todos los segmentos poblacionales, tendientes al mantenimiento de la población en el sistema financiero formal.

Como propuesta para incrementar la bancarización y la formalización en el Uruguay, AEBU elaboró un informe donde se puntualiza que gran parte de las personas de bajos recursos son excluidas del sistema financiero formal, y lo que se debería buscar es crear un sistema financiero incluyente que promueva el acceso a servicios y productos a todos los sectores sociales, que complementados con programas de capacitación, promuevan la bancarización como una herramienta adecuada para la formalización de la actividad económica. Sostienen que un acceso más flexible a la utilización de productos y servicios financieros permitirá avanzar con mayor velocidad en el proceso de formalización de muchas unidades económicas que hoy se encuentran al margen del sistema formal, consolidando el proceso de inclusión financiera (AEBU, 2009).

En el último informe del banco mundial sobre el desarrollo financiero mundial 2014 (BANCO MUNDIAL, 2014), se analiza la situación de la inclusión financiera destacando dos puntos centrales. Por un lado, que el desarrollo de la banca móvil y otras innovaciones tecnológicas facilitan la expansión de los servicios financieros a los pobres, a las mujeres y a otros grupos desatendidos. También destacan el hecho que inclusión financiera no debe significar financiamiento para todos a toda costa.

Más de 50 países se han comprometido en aumentar la inclusión financiera fijando objetivos explícitos para alcanzar la meta de brindar acceso universal a los servicios financieros a todos los adultos en edad de trabajar a más tardar en 2020.

Algunas de las medidas que ya han tomado muchos de estos países para ampliar el uso de cuentas bancarias entre las personas relegadas por instituciones financieras tradicionales son, entre otros, la obligatoriedad de ofrecer cuentas de bajo costo, la eliminación o flexibilización de la exigencia de presentar documentación costosa o de difícil obtención para los clientes y el uso de sistemas de pago electrónico para el depósito de la ayuda financiera gubernamental.

El uso de innovaciones tecnológicas también se presenta como una herramienta eficaz, los servicios de banca móvil, la implementación de corresponsalía bancaria basada en el uso de

tecnología, que llevan los servicios financieros a zonas de difícil acceso de los canales tradicionales mediante corresponsales instalados en estaciones de servicio, agentes que se movilizan en motocicleta o en botes por el río.

Para maximizar el uso de estas innovaciones, se recomienda generar un entorno legal, regulatorio e institucional que minimice la posibilidad de que se otorgue demasiado crédito a personas no calificadas para recibirlo. El uso de estas tecnologías ha sido impulsado fundamentalmente por entidades financieras no tradicionales, como financieras, cooperativas y otros actores no bancarios.

“Los servicios financieros están fuera del alcance de muchas personas porque las fallas del mercado y del Estado han elevado los costos a niveles prohibitivamente altos. El desafío de llegar a los no bancarizados.”(Asli DemirgucKunt Directora de investigaciones del Banco Mundial. En BANCO MUNDIAL, 2014)

La promoción de la inclusión financiera no está exenta de responsabilidades. En ningún caso debería significar financiamiento a todos a toda costa, la promoción el crédito sin tener en cuenta el costo para la persona en relación a su capacidad de pago puede fomentar la inestabilidad financiera y económica de los usuarios y del sistema en general. Para esto es necesario promover el diseño de programas que aborden las fallas del mercado, satisfagan las necesidades de los clientes y permitan superar problemas conductuales, así como promover el consumo responsable para que los consumidores entiendan mejor los temas financieros.

2.3.1. Sobre la Exclusión en el Mercado de Crédito

Para el análisis de los procesos de exclusión se plantea la distinción entre mercados de competencia perfecta e imperfecta. El mercado de crédito se presenta como un mercado de competencia imperfecta, donde los bancos priorizan las tasas de interés y el riesgo de crédito aplicando diversos mecanismos de selección en un contexto de incertidumbre con información residual e imperfecta (Figueroa, 1996).

Según esta lógica, los bancos discriminan, por ejemplo, a los pequeños agricultores debido a las dificultades de acceso a información confiable en tiempo y forma, y a los altos costos de la transacción. Por su lado, los prestamistas informales sí son capaces de otorgar este tipo de préstamos. La hipótesis manejada por el autor es que estos actores tienen acceso a la misma lógica económica que los bancos, pero cuentan con mejor información y medios de

gestión más eficientes y rentables. El resultado es la segmentación del mercado de crédito, las grandes unidades participan en el mercado de crédito formal y tradicional, mientras que las pequeñas unidades lo hacen en el mercado informal pagando mayores precios.

Así, en los mercados de competencia imperfecta, las personas son excluidas del intercambio por la lógica del mercado, lo que implica que algunas de las personas capaces y deseosas de participar sean excluidas.

2.3.2. Acceso y Uso de Productos Financieros

En el marco de este trabajo, desarrollamos el concepto de *acceso* como la posibilidad para los individuos de abrir una caja de ahorro, tomar un crédito y realizar transacciones en alguna entidad financiera formal. Por su parte, el *uso* de estos productos y servicios implica el conocimiento, la capacidad y la posibilidad de utilización. En ambos casos el alcance del concepto varía según el producto/servicio.

Determinantes del Acceso

De la encuesta realizada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en relación a los servicios financieros para el desarrollo en América Latina (CAF, 2011), se desprende que si bien hay una clara relación entre el nivel de ingreso de los hogares y el uso de servicios financieros, existen otros factores que determinan el acceso. Los motivos de no acceso se pueden sintetizar en dos grandes grupos:

- a) la decisión de los hogares de autoexcluirse, principalmente por una predisposición a no endeudarse, poca cultura financiera y, en menor medida, por la impresión de que no se tiene suficientes garantías e ingresos, y
- b) el rechazo, por parte de las entidades financieras, de aspirantes con bajo colateral e ingresos y malos historiales de crédito.

Sobre el segundo grupo, uno de los principales motivos de rechazo está dado por problemas de información. Una de las dificultades en la provisión de ciertos servicios financieros (especialmente de crédito) es la información asimétrica entre proveedores y potenciales clientes. La transparencia de la información sobre los clientes de las instituciones financieras tiene el potencial de mejorar el acceso de manera importante, al mismo tiempo que pueden aumentar los incentivos de cumplir adecuadamente con los pagos acordados.

Otro motivo de rechazo es la oferta de instrumentos financieros insuficiente o no ajustada a las necesidades de la población, así como la rigidez de requisitos y documentación. En el caso del crédito, términos muy rígidos, o porque las familias sienten desconfianza de las instituciones financieras porque no entienden su lógica o porque perciben como entes muy distantes socialmente.

Los altos costos también son una limitante, así como las carencias de educación financiera, que según el nivel de cultura o educación financiera de los hogares, pueden no comprender las ventajas de ciertos servicios.

Un nivel de riesgo esperado en un solicitante mayor al máximo que está dispuesto a asumir la entidad, es una de las limitantes de acceso más frecuentes.

Otra de las dimensiones a tener en cuenta es el entorno regulatorio e institucional, donde se reconoce que el impacto tanto en el acceso como en el bienestar puede ser diferente y depender del contexto institucional y regulatorio en el que se implemente.

Para los productos de ahorro, crédito y servicios transaccionales el acceso está vinculado a la posibilidad de comprender las características del producto, los derechos y obligaciones asociados al mismo, así como llegar a sucursales de entidades que ofrezcan este producto. Para los productos de ahorro y crédito también es necesario cumplir los requisitos y presentar la documentación solicitada por la entidad, así como solventar los gastos asociados al pago de cuotas de créditos y comisiones, costos de emisión, pago de consumos, costo de apertura de cuenta y pago de sobregiros.

En los productos de ahorro los requisitos y documentación solicitados están relacionados, en su mayoría, a la identificación y ubicabilidad del individuo. Por lo cual los mayores obstáculos en el acceso a estos productos están relacionados con el desconocimiento del producto, los costos y la cobertura en todas las áreas de los países.

En los productos de crédito los requisitos y documentación solicitados suelen ser más restrictivos que los productos de ahorro. Al tratarse de productos de riesgo, además de los requisitos de identificación y ubicabilidad del individuo, se evalúan los antecedentes en el sistema financiero y comercial, las características socio económicas y demográficas, así como a la posibilidad de demostrar su fuente de ingresos y su capacidad de repago. Sumado esto, a desconocimiento del producto, altos costos y falta de cobertura, vemos que el acceso al crédito resulta restrictivo para varios sectores de la población, especialmente aquellas con

ingresos precarios, ya sea porque son bajos, inestables o por dificultad para demostrar su fuente de ingresos.

Modalidades de Uso

El uso de los productos de ahorro está asociado básicamente a la posibilidad de realizar depósitos y retiros de la cuenta, utilizar el débito como medio de pago y hacer uso de los beneficios que muchas entidades tienen asociados al uso de estos productos (promociones, sorteos, descuentos, etc.). Las restricciones de uso están dadas fundamentalmente por la cobertura del servicio y los costos de mantenimiento de cuentas.

En el caso de los créditos el uso está asociado al pago de obligaciones en tiempo y forma. Para las tarjetas de crédito, el uso está asociado al consumo utilizando este medio de pago, así como el pago de los mismos. Y en el caso de las cuentas corrientes con acuerdo, el uso está asociado al uso del sobregiro y al pago del mismo.

En los tres productos de riesgo mencionados, el no pago de las obligaciones en tiempo y forma puede implicar la inhabilitación o dificultad en el acceso a otros productos de crédito futuros, así como la suspensión o inhabilitación de la cuenta activa (sólo para tarjetas y cuentas).

3. Situación General en los Países Estudiados

3.1. Descripción de la Población

3.1.1. Población Paraguaya

Paraguay es un país con población escasa en relación a otros países de la región, que ha experimentado un alto crecimiento en las últimas 5 décadas. Según el censo de 1950 Paraguay contaba con 1.328.452 habitantes, y en el 2002 con 5.163.198 y se estima que con la tasa de crecimiento actual, el país duplicaría su población en 30 años (DGEEC, 2013).

Dos fenómenos resaltan en la realidad actual del Paraguay, el alto crecimiento macroeconómico y la fuerte desigualdad económica en el país. En los últimos 5 años el índice de Gini pasó de 0.521 a 0.526, al tiempo que el PBI crece a un promedio de 4.6% al año. En contraste a estas cifras se habla del Paraguay de los extremos, crecimiento y acumulación por un lado, y abandono y precariedad en el planteo de políticas públicas por otro (DEMENTESX, 2014). El 10% de la población está en la pobreza extrema, el 24% está en la línea de pobreza, el siguiente 25% es parte de la clase media baja, y el restante 41% se distribuye entre las clases medio alta y alta.

El país está transitando un período de recuperación a partir del 2003, en el cual se plantea el desafío de convertir esta recuperación en un crecimiento sostenido e inclusivo. En este sentido, uno de los obstáculos observados es la heterogeneidad de la estructura productiva, ya que en una economía donde conviven sectores de alta y baja productividad se abre una brecha en las oportunidades que se les presentan a los individuos, siendo más favorecidos aquellos vinculados a los sectores con mejores niveles de productividad.

Si bien han mejorado los indicadores macroeconómicos en relación al pasado, se mantiene una alta volatilidad de los ciclos, que se traduce en una gran variación en los niveles de consumo, lo que afecta especialmente a las condiciones de vida de los pobres.

Entre los rasgos positivos del proceso está la incidencia del bono demográfico en el mediano plazo² y la oportunidad de maximizar los recursos naturales (Paraguay aún tiene margen para incrementar la producción sobre la tierra y las cadenas de valor asociadas) (FANELLI, 2012).

Los desafíos que se presentan son mantener la estabilidad macroeconómica alcanzada, reducir la volatilidad macroeconómica general, al igual que la continuidad en las políticas de reforma estructural como el aumento de la apertura comercial, una mejor educación, y la profundización financiera (BANCO MUNDIAL, 2010).

A pesar del crecimiento económico desde el 2003, se ha incrementado la brecha del PBI per cápita del país en relación al promedio de América Latina y el Caribe. Si bien se observa una disminución en las tasas de pobreza de la última década (reducción que se explica en mayor medida por el crecimiento económico y no por una mejora en la distribución de la riqueza) el desafío de reducir la pobreza y la indigencia permanece.

Paraguay está por debajo del promedio de América Latina en la mayoría de los indicadores socioeconómicos, no obstante muestra avances en casi todos ellos, consiguiendo mejoras reales en el bienestar de su población a pesar de la comparación desfavorable con el resto de la región.

La pobreza rural sigue siendo alta, al 2008 dos de cada cinco paraguayos era pobre y uno de cada cinco indigente. Las diferencias por zonas son notorias, la incidencia más baja de la pobreza se da en Asunción y la más alta en la zona central y poblaciones rurales.

En términos generales el perfil de los jefes de hogares pobres es similar al de los jefes de hogares no pobres, aunque reportan mayores niveles de primaria incompleta y bajos niveles de estudios terciarios, así como mayor informalidad en el empleo y mayor participación en empleos relacionados a la agricultura. También tienen mayores tasas de dependencia, hablan guaraní en el hogar y viven en viviendas precarias en términos de infraestructura y con bajo acceso a servicios eléctricos y telefónicos.

² Bono demográfico refiere al período de progresiva disminución de la razón de dependencia demográfica (en el caso de Paraguay, iniciada en la década de 1970 y que se extenderá hasta mediados del siglo XXI), que generará en los próximos años una progresiva disminución de las demandas agregadas en educación y salud, que permitirán orientar el gasto público hacia la inversión o mejoras en la calidad educativa.

Durante los últimos 20 años se ha extendido el acceso de la población al sistema educativo, así como la permanencia en él. Los pobres han mejorado la matrícula escolar logrando una asistencia casi universal en niños de 6 a 12 años, pero que disminuye sustancialmente a partir de los 12 años. En relación a esto hay quienes señalan (ORTIZ, L. en DEBATE, 2014) que en su expansión, el sistema educativo reproduce la estructura social, generando un sistema universal y abierto en la base, y selectivo y discriminatorio en la cúspide, logrando resultados moderados en la reducción de las brechas de educación.

Los indicadores de salud están por debajo del promedio de América Latina, siendo especialmente baja la inversión en salud y limitada la cobertura de seguros médicos.

Sobre la correlación entre pobreza y características del hogar vemos que...

“... el ingreso aumenta, y la probabilidad de ser pobre disminuye si el individuo tiene mayor educación, es más joven, hombre, bilingüe castellano-guaraní, no trabaja en agricultura o en el sector informal, y vive en un hogar con menos personas. Para los individuos del medio urbano, la probabilidad de tener un ingreso más alto aumenta si la persona no vive en la región Central.” (BANCO MUNDIAL, 2010)

La desigualdad de oportunidades parece estar muy relacionada con la oportunidad de acceso a bienes y servicios básicos de la población infantil. Esto surge de los bajos niveles del índice de oportunidad humana³.

También se observa una mejora en la mayoría de los indicadores relacionados al mercado laboral. Aumentaron el nivel de empleo y de actividad, y disminuyeron la desocupación y la informalidad.

En términos de género, las mujeres presentan mayores períodos de desocupación, mayores niveles de informalidad y subempleo, así como mayores brechas salariales en relación a los hombres. Además, estas brechas se acentúan para las minorías étnicas.

El nivel educacional de la población está por encima del promedio observado en países latinoamericanos con niveles similares de ingreso per cápita. Sin embargo, la fuerza laboral paraguaya tiene mayor participación de trabajadores con nivel educativo bajo y alto nivel de informalidad.

³ El principio de igualdad de oportunidades estipula que los niños deben tener la oportunidad de acceder a bienes y servicios claves necesarios para tener la oportunidad de ser exitoso en la vida y dicho acceso no debe depender de circunstancias sobre las que no se tiene control (tales como la raza, género, ingreso familiar, nivel educativo de los padres, o lugar de residencia).

La población joven (entre 15 y 29 años de edad) representa el 27.5% de la población total, de los cuales el 62% reside en zonas urbanas. El 66% de los jóvenes participa en el mercado laboral (ocupados y desocupados), habiendo diferencias importantes entre hombres y mujeres (77% de actividad en hombres y 54% en mujeres). En el caso de las mujeres la tasa de actividad es mayor en las zonas urbanas que en la rurales.

La tasa de desempleo es del 9.2% para jóvenes, esta tasa es mayor para mujeres que para hombres. El subempleo, situado en un 25% para los jóvenes, también afecta más a las mujeres jóvenes que a los hombres del mismo grupo etario. Cerca del 16% de la población joven tiene 6 o menos años de estudio, aunque el porcentaje varía sustancialmente por zonas, siendo de un 7,7% en áreas urbanas y alcanzando un 27,3% en zonas rurales.

La mayor parte de los jóvenes que trabaja lo hace en el sector terciario de la economía (especialmente las mujeres). El 60% se desempeña como dependiente o asalariado y el 50% lo hace en empresas de 5 o menos trabajadores. Sólo el 33% aporta a un sistema jubilatorio o de pensión, y el 75% no cuenta con seguro médico (DGEEC, 2013).

3.1.2. Población Uruguaya

Uruguay es un país de transición demográfica avanzada, caracterizado por su pequeñez poblacional en relación al continente, bajo crecimiento de la misma, creciente urbanización y concentración de la población en la franja costera y en el área metropolitana de Montevideo, envejecimiento de su estructura de edades, fecundidad por debajo de los niveles de reemplazo y crecimiento de la participación de las uniones libres en la población joven.

Al mismo tiempo, mantiene una tendencia descendente de la pobreza, con diferentes magnitudes en relación a la edad de las personas y su ubicación territorial.

También se caracteriza por el aumento sostenido de las tasas de actividad en la última década, con variaciones en la tasa de desempleo, con tendencia a la baja para el conjunto de la población, pero con brechas por sexo, edad y región, y con indicadores de calidad de empleo con resultados positivos en relación al subempleo y la informalidad (MIDES&OPP, 2013).

Las mujeres representan una proporción mayor de la población (52%) que los varones (48%). A medida que avanza la edad el peso relativo de las mujeres es mayor, quienes están

sobrerrepresentadas entre las personas mayores y su expectativa de vida es superior a la de los hombres.

La diferencia por género en la participación en el mercado laboral es menor en la capital que en el interior. La concentración de mujeres como su tasa de empleo es mayor en el área metropolitana que en el interior del país.

Los hombres presentan una tasa de actividad más elevada que las mujeres en todos los tramos etarios. Del total de hombres en edad de trabajar, el 67.3% se encuentran ocupados, mientras que para las mujeres de este grupo sólo el 47.3% son ocupadas. De los varones en edad de trabajar, 70.4% son activos, mientras que de las mujeres en edad de trabajar, 51.8% son activas.

También se observa en los hombres tasas de empleo más elevadas que en las mujeres. Esto se da en todos los tramos etarios, aunque la brecha entre ambos grupos es mayor dentro de la población adulta de 30 años o más, en comparación con la población joven.

La tasa de empleo, crece con el nivel educativo y la brecha entre hombres y mujeres es mayor cuanto menor es el nivel educativo. Si bien las mujeres presentan mejores rendimientos y desempeños en el sistema educativo, estos no se traducen en mejoras en el acceso al mercado laboral, los ingresos aumentan a medida que aumenta el nivel educativo alcanzado, no obstante para un mismo nivel educativo los ingresos percibidos por las mujeres son menores que por los hombres.

Las tasas de desempleo son mejores para hombres que para mujeres y los niveles de cobertura de seguridad social no presentan diferencias por género.

En términos de desigualdad por edades, Uruguay tuvo una transición demográfica precoz en relación a los países de la región y la mayoría de los países no industrializados, desde 1890 las tasas brutas de natalidad y mortalidad descendieron casi de continuo, afectando el crecimiento de la población y cambios en la estructura de edades, con un claro envejecimiento de la población (CALVO, 2014).

La emigración es una variable que afecta directamente la estructura poblacional, en el caso uruguayo los ahucamientos en edades correspondientes a personas jóvenes y en edad de trabajar reduce el potencial reproductivo de la población acentuando sus envejecimiento.

La mayor representación de mujeres para el grupo de hasta 21 años de edad, donde los hombres son más que las mujeres, se invierte a partir de esa edad donde el número de mujeres se incrementa en relación a los hombres, y al llegar los grupos de edad más avanzados la relación es de más de tres mujeres por cada hombre.

El 23.9% de la población son jóvenes de entre 14 y 29 años. Este peso relativo de la juventud en el total de la población está dentro del rango esperado para los países de transición demográfica avanzada. Comparado con los datos regionales hay una sobre representación de adultos y adultos de la tercera edad por cada joven. El mencionado proceso de disminución del peso de los jóvenes como grupo social se encuentra acompañado de un proceso acentuado de envejecimiento, aunque avanzado a nivel país, presenta diferencias significativas por departamento y barrio.

Para todos los tramos etarios las tasas de empleo presentan un comportamiento creciente con el nivel educativo. Mientras que las personas con posgrados muestran una tasa de empleo como mínimo de 85%, las personas que nunca asistieron a un centro educativo muestran una tasa de empleo como máximo de 35%, lo que demuestra la importancia que el mercado laboral le otorga a la educación y cómo esta influye al momento de conseguir un empleo.

Las tasas de desempleo decrecen con la edad. La informalidad en el mercado laboral afecta mayoritariamente a la población joven en comparación con la adulta. Especialmente es notoria la no cobertura de la seguridad social en los adolescentes. Estos jóvenes no solo encuentran mayores dificultades para acceder a un empleo, sino que además, una vez que acceden es probable que lo hagan en condiciones de informalidad.

La estructura por edades de la población con necesidades básicas insatisfechas es más joven que la de la población con necesidades básicas satisfechas y la brecha es más notoria entre población infantil y adultos mayores (CALVO, 2014).

La dimensión geográfica da cuenta de distintos niveles de avance en transición demográfica por departamento y barrios de Montevideo. Al sur del Río Negro se encuentran los departamentos que presentan menor peso demográfico de la población joven y mayores índices de envejecimiento (Lavalleja, Colonia, Florida, Rocha y Montevideo). Al norte (Artigas, Salto y Rivera) y al este (Maldonado) del país se ubican los departamentos con población menos envejecida. En Montevideo hay mayor concentración de jóvenes en los

barrios periféricos que en los ubicados al centro y sur-este del departamento, lo que muestra una pauta de distribución territorial donde los barrios con mayor peso demográfico de los jóvenes son aquellos con mayor riesgo o vulnerabilidad social.

También se observan diferencias significativas en las tasas de actividad y empleo entre la zona metropolitana y el interior del país, sin embargo, en los departamentos del norte del país las tasas son más bajas que en los del sur, y en los barrios con menor poder adquisitivo las tasas de actividad de los adolescentes son claramente mayores que en el resto de los barrios.

En relación al mercado laboral, la población en edad de trabajar representa el 79.8% de la población total de Uruguay, con una creciente participación a medida que aumenta el nivel educativo. A partir de los indicadores de actividad, ocupación, empleo y desempleo, se puede concluir que los jóvenes están en posición de desventaja a la hora de conseguir empleo en relación a la población adulta, esto afecta especialmente a las mujeres en todas las zonas del país.

3.2. Inclusión Financiera

El *Microscopio 2014* elaborado por CAF (CAF, 2014) mide el entorno nacional para la inclusión financiera a través de una serie de indicadores que miden: el apoyo del gobierno a las instituciones financieras, su capacidad de regulación y supervisión, regulación y supervisión de carteras de crédito, de actividades de captación de depósitos, de seguros dirigidos a personas de bajos ingresos, de las sucursales y agentes, del pago electrónico, de los requisitos para las entidades no reguladas, los sistemas de información crediticio, las reglas de conducta del mercado y los mecanismos de resolución de controversia.

El resultado de esta medición es la asignación de puntajes y clasificaciones de cada país. En esta clasificación Paraguay y Uruguay comparten, con 53 puntos sobre 100, el número 14 en el puesto general y el sexto puesto (junto a Brasil) en la región, valor por encima del promedio de América Latina (49).

3.2.1. Inclusión Financiera en Paraguay

A pesar de ser Paraguay uno de los países más pobres de América Latina, con altos niveles de desigualdad y áreas rurales que carecen de acceso adecuado a la educación y servicios financiero, el país ha liderado la región con el desarrollo de servicios de dinero móvil, y el Banco Central del Paraguay ha publicado algunas normativas que permiten sentar las bases legales para avanzar en la inclusión financiera del país⁴.

En paralelo, el gobierno Paraguayo está desarrollando una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo último es reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico del Paraguay.

“Paraguay está pasando de una situación en la que casi no se supervisaba la prestación de servicios financieros a grupos de bajos ingresos, a una en la que existe más fiscalización. Sin embargo, sus estructuras normativas todavía se están adaptando a esta nueva meta y no pueden mantener el ritmo de nuevas innovaciones.” (CAF, 2014: 59)

La visión de inclusión financiera planteada incluye la generación de servicios financieros asequibles y de calidad para todas las personas en Paraguay que los quieran a través de un mercado diverso y competitivo. Su definición oficial es:

“El acceso y uso de una gama de servicios financieros de calidad, en forma oportuna, conveniente, informada y con un costo accesible, bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras y la toma de decisiones racionales por parte de todos los segmentos de la población.”(MINISTERIO DE HACIENDA Paraguay, 2014: 6)

Según la Encuesta Nacional sobre Inclusión Financiera (MINISTERIO DE HACIENDA Paraguay, 2014), el 58% de los adultos en Paraguay utilizan algún tipo de producto financiero formal o comercial para gestionar sus finanzas cotidianas. Este número se explica por la fuerte participación de las cooperativas y los proveedores de dinero móvil en Paraguay, que en conjunto alcanzan el 40% de la población.

No obstante, el 42% de los adultos permanecen excluidos del sistema financiero, no tienen crédito en una institución formal, no utilizan cajero automático, tarjetas de crédito ni dinero

⁴El Reglamento de la Cuenta Básica de Ahorro permite flexibilizar los requisitos de documentación para poder abrir una cuenta bancaria y minimizar los costos de mantenimiento, mientras que el Reglamento de Medios de Pago Electrónico establece las bases de operación de los servicios financieros móviles que han tenido una gran penetración en el país.

móvil, no tienen seguro y reciben los salarios sólo en efectivo. Estos “excluidos” son desproporcionalmente pobres, tienen educación primaria o menor y están desempleados o fuera de la fuerza laboral.

El acceso a servicios financieros formales está limitado en las áreas rurales. No hay sucursales de cooperativas ni bancos donde vive el 17 por ciento de la población.

Al 2012 Paraguay cuenta con 16 bancos, 12 financieras y 330 cooperativas que intermedian fondos y están reguladas. Paraguay tiene uno de los sistemas financieros más grandes y competitivos de la región en términos del porcentaje de la población atendida, de hecho las cooperativas tienen más cuentas que el sistema bancario.

Con un 29% de adultos con una cuenta en una institución formal, en relación con otros países de ingresos medio-bajo en América Latina la inclusión financiera en Paraguay es moderadamente más avanzada, aunque sigue rezagada para el promedio general de la región (39%).

Según análisis econométricos realizados por el Ministerio de Hacienda de Paraguay a partir de los datos de la encuesta, las brechas más significativas de acceso se dan por ingresos, educación y categoría de ocupación. Las diferencias de género y área urbano/rural existen, pero no son estadísticamente significativas.

Las principales barreras de acceso identificadas en la encuesta están relacionadas con la falta de dinero y documentación, el costo excesivo y la burocracia. Hay que tener en cuenta que Paraguay tiene un gran mercado informal, y quienes se desempeñan en estos tienen especial dificultad para cumplir con los requisitos para demostrar el empleo y el ingreso, uno de cada cinco paraguayos no bancarizados están en esta situación. En este contexto, las personas de bajos ingresos que desean ahorrar no tienen muchas oportunidades de hacerlo en instituciones financieras formales.

3.2.2. Inclusión Financiera en Uruguay

En el anterior período de gestión el gobierno uruguayo ha establecido como una de sus prioridades la promoción de avances en el acceso a los servicios financieros como un mecanismo de inclusión social.

“Uruguay tiene uno de los ingresos per cápita más altos de la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el uso de los productos bancarios es

relativamente bajo. Pese al crecimiento económico estable de los últimos años, la inclusión financiera se ha desarrollado lentamente.” (CAF, 2014: 62)

Una de las formas de medir la situación de Uruguay en este tema es a través del análisis de los niveles de bancarización, que tradicionalmente se mide en tres dimensiones: a) *profundidad*, en relación a la importancia relativa agregada del sistema financiero en la economía, b) *cobertura*, sobre la distribución de los servicios financieros entre los distintos tipos de usuarios, y c) *intensidad de uso*, referido a la cantidad de transacciones bancarias vinculadas a la población de referencia.

En relación a la profundidad, los niveles de penetración del crédito son bajos en la región (44%), y especialmente bajos en Uruguay (22.3%). Los bancos, en particular los privados, muestran una mayor concentración en segmentos de ingresos medios, mientras que las entidades no bancarias se concentran en hogares de ingresos menores (ODDONE, 2011).

El indicador de cantidad de sucursales por habitante sitúan a Uruguay levemente por debajo del promedio de la región (promedio de la región 14.5%, Uruguay 13.9%), aunque hay una alta concentración en los departamentos de Montevideo, Colonia y Maldonado.

En los tres niveles mencionados Uruguay muestra retrasos respecto a la región, lo que parece indicar que el sistema financiero uruguayo, especialmente el sector bancario, no ha logrado penetrar en forma masiva en los segmentos de más bajos ingresos de la población.

Según la base de datos global de inclusión financiera del Banco Mundial (Global Findex), al 2011 los adultos con al menos una cuenta bancaria era en 24% del total de los mayores de 15 años.

Entre las hipótesis que se manejan para explicar esta situación se plantea que las características específicas de la población no bancarizada oficia de restricción para acceder a una oferta en el sistema financiero tradicional, estas características son las relaciones laborales informales, la falta de garantías, limitaciones de cultura financiera en relación al uso de los productos y también la falta de historial crediticio.

También existen trabas relacionadas con la incapacidad de los bancos de ajustar sus procesos, tecnología y servicios de atención al cliente a las necesidades de un negocio masivo. Por su parte, los demandantes de estos servicios tienen cierta reticencia a trabajar con bancos por percepciones negativas que actúan como una barrera para operar en bancos tradicionales.

La demanda insatisfecha de productos financieros, especialmente de los segmentos de bajos ingresos, ha sido cubierta parcialmente por instituciones financieras no bancarias.

Esto se debe fundamentalmente que este tipo de entidades han superado varios de los obstáculos antes mencionados del sistema financiero tradicional, especialmente hay actores del mercado que han desarrollado e implementado un conjunto de tecnologías que permiten disociar la elegibilidad del solicitante respecto a su nivel de ingreso y grado de información presentada. También tienen menores restricciones normativas que derivan en menores costos, ampliando la posibilidad de ofrecer créditos de montos pequeños, y sobre todo una estructura organizativa diseñada especialmente para atender al segmento de bajos ingresos.

Como resultado se puede afirmar que los segmentos poblacionales tradicionalmente excluidos del sistema financiero bancario gozan hoy de mayor acceso a los servicios financieros.

Asimismo, la ley de inclusión financiera vigente en el país desde agosto del 2014, cambia las reglas del juego y amplía las posibilidades de expansión del acceso a productos financieros formales para gran parte de la población. No obstante, sus detractores afirman que el incremento esperado en el acceso a los servicios financieros, se vea mermado por la desventaja relativa en la que se encuentran las instituciones financieras no bancarias en la ley.

“El sector de servicios financieros está sufriendo una fragmentación cada vez más acentuada. Los bancos privados se orientan hacia las personas de mayores ingresos, en tanto que el BROU y las financieras ofrecen servicios a los pobres. La Ley de inclusión financiera da preferencia a los bancos y no a otras instituciones financieras, de manera que puede disminuir la competencia de las instituciones no bancarias.” (CAF, 2014: 62)

4. Las Entidades Emisoras de Crédito

4.1. Caso de Estudio 1: Paraguay

El caso de la entidad Paraguaya que se ha tomado como caso de estudio la inclusión financiera se enmarca en un proyecto financiado y promovido por el BID para su programa Oportunidades para la Mayoría: “*Proyecto PRL1074: Inclusión Financiera de la Base de la Pirámide mediante Banco Interamericano de Desarrollo*” con el objetivo de expandir el acceso al sector financiero para trabajadores informales de la Base de la Pirámide en Paraguay mediante una facilidad de crédito que satisfaga las necesidades de acceso al crédito para este segmento (BID, 2013).

El mercado laboral del Paraguay presenta altos índices de informalidad, el 80% de la población que trabaja y percibe ingresos tiene dificultades para poder demostrarlo. Ante necesidades financieras inmediatas para atender emergencias, estas personas no pueden conseguir recursos de entidades financieras formales por carecer de historial crediticio. El acceso al financiamiento bancario a este segmento prácticamente no existe debido al costo transaccional y al tiempo que conlleva verificar las fuentes de repago.

En este sentido, el objetivo del proyecto es poner a disposición de la población laboral del sector informal una línea de crédito exclusiva para poder atender sus necesidades de crédito para emergencias (educativas, de salud y emergencias familiares) a través de un sistema de scoring⁵ innovador adaptado a la falta de record crediticio y aval de ingresos. Con este proyecto se espera promover la bancarización de este sector de la población, normalmente, sin historial crediticio formal.

⁵ Los scoring estadísticos de estas entidades se desarrollan a partir de conocimiento cuantitativo sobre el desempeño y características de préstamos pasados con el objetivo de pronosticar el desempeño de los préstamos a futuro. Credit Scoring es el nombre con que se identifica la herramienta utilizada por las entidades financieras para evaluar el nivel de riesgo asociado a los solicitantes de crédito (pueden ser clientes o no de la entidad). El resultado, en general, se expresa como una probabilidad de incumplimiento que surge de la experiencia histórica de pago de los distintos perfiles de riesgo. Permite estimar la probabilidad de default, ordenar a los deudores y solicitantes de financiamiento en función de su riesgo de incumplimiento.

La evaluación por scoring pondera las características del perfil socioeconómico, laborales, de la historia del solicitante como cliente y del crédito solicitado. El resultado es un puntaje que indica la probabilidad de que la operación entre en mora, indicando así el nivel de riesgo que se asume con la misma. El sistema determina si la solicitud está aprobada por scoring cuando la probabilidad de mora es menor que la cota máxima de riesgo aceptable para el producto. La cota o frontera de aprobación para el scoring es fijada en el momento de diseñar el plan comercial. Un esquema flexible de definición de tipos de crédito permite determinar el nivel de riesgo para cada producto.

En paralelo la entidad ⁷ha establecido una alianza con una operadora de telefonía móvil, que permitió el desarrollo de un servicio de banca móvil para todos sus clientes. La entidad bancaria es la responsable del servicio financiero tomando como referencia el paradigma de evaluación desarrollado para el proyecto antes mencionado. Por su parte, el operador telefónico disponibiliza su plataforma tecnológica y experiencia en la administración de su red de agentes, permitiendo que los clientes puedan recibir créditos, efectivizarlos y pagar sus cuotas desde el teléfono o en cualquiera de los punto comerciales de la operadora.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF a través del Programa de Tecnologías para la Inclusión Financiera (TECIN).

4.2. Caso de Estudio 2: Uruguay

La entidad elegida como caso de estudio de Uruguay es una entidad financiera que se autodefine como una empresa de tecnología enfocada en los servicios financieros. Sus primeros pasos en inclusión financiera fueron a través innovaciones en inteligencia de productos con una tarjeta de crédito que se comporta como un préstamo, una tarjeta de pago fijo mensual (asimilable a la cuota de un préstamo) orientada a personas de bajos ingresos, no bancarizada o con baja bancarización.

En el 2008 fue la primera empresa uruguaya en desarrollar e implementar la inteligencia para prestar sólo con la cédula de identidad, un producto orientado especialmente a la inclusión financiera.

La empresa cuenta con la red más grande de distribuidores de crédito del Uruguay. Desarrollaron, junto a un socio estratégico dedicado al desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas para puntos de venta con un software abierto para computadoras personales de puntos de venta, una aplicación que corre sobre una tableta que permite acceder a la solicitud de crédito y tarjeta, así como el cobro de las mismas, sólo con la cédula de identidad.

4.3. Observaciones Generales

A partir de las distintas iniciativas de inclusión financiera promovidas desde los gobiernos, así como desde entidades financieras de distinta índole, se pueden identificar una serie de obstáculos que presentan algunos denominadores comunes:

- Obstáculos sociales, macroeconómicos y de infraestructura.
- Debilidades institucionales que se traducen en ausencia de seguridad jurídica y deficiencias en leyes esenciales para la provisión de servicios financieros.
- Obstáculos provenientes de la actividad bancaria, como elevados requisitos a las personas de bajos ingresos, deficiencias en los mecanismos de evaluación de riesgo y de atención al cliente.
- Distorsiones regulatorias como la creación de impuestos a las transacciones financieras, la fijación de topes a las tasas de interés y normas que canalizan un porcentaje de la cartera a precios subvencionados hacia sectores y actividades que los gobiernos desean incentivar.
- Lento desarrollo tecnológico, especialmente en algunos países de la región.

En los casos estudiados algunos de los puntos mencionados como obstáculos entendemos que han sido sorteados con éxito.

Ambas entidades cuentan con mecanismos de evaluación de riesgo sofisticados, parametrizables y adaptables a los distintos segmentos de la población. Los mecanismos de evaluación desarrollados por estas entidades permiten identificar dentro de un segmento tradicionalmente considerado de alto riesgo y baja rentabilidad, clientes con riesgo controlado y niveles de rentabilidad razonables.

Los requisitos a las personas que demandan los productos evaluados, son mínimos y están relacionados básicamente con comprobantes de identificación y domicilio (estos últimos ampliamente flexibles). Si bien en varios países latinoamericanos es frecuente la exclusión financiera por falta de documentos de identidad en lugares donde existe una gran población inmigrante, o en zonas rurales con bajos niveles de educación; en Uruguay este no es un problema, y en Paraguay sólo en algunas zonas rurales.

La atención a la población de bajos ingresos, es una asignatura pendiente de gran parte de los países de la región. Este “nuevo” público requiere asesoramientos sobre los tipos de productos, condiciones y regulaciones bancarias tradicionales.

“La falta de personal entrenado deriva en muchas ocasiones en una “autoexclusión” a tomar servicios financieros de entidades formales por parte de personas pobres.”(ASBA, 2012: 11)

Asimismo, una cantidad insuficiente de tipo de entidades en algunas localidades, especialmente en zonas rurales, es un obstáculo adicional.

En este sentido, las sucursales de ambas entidades tienen una imagen no típicamente bancaria, con capilaridad y presencia en todos los departamentos de sus países. De todas formas, en el caso paraguayo, el acceso en zonas rurales no es total.

Uno de los argumentos de las entidades tradicionales para restringir el acceso al crédito a los segmentos de bajos recursos es su bajo nivel de ingresos, sin embargo, es un argumento que está perdiendo peso en los últimos años. No obstante, la informalidad así como la volatilidad de los ingresos, especialmente de los trabajadores independientes, sigue siendo un desafío a la hora de estimar la capacidad de repago de estos clientes. Para hacer frente a esta dificultad ambas entidades han desarrollado modelos que permiten estimar el nivel de ingreso de los solicitantes con información de sus gastos, datos socio demográficos e información sobre el tipo de comercios, financieras, bancos y otras entidades donde la persona realiza consultas.

Asimismo, ambas entidades cuentan con una infraestructura tecnológica y sistemas que soportan la operativa, en ambos casos con tecnología de punta que permiten, entre otras cosas, administrar mejor sus riesgos, evitar problemas de selección adversa y disminuir el riesgo de crédito. A través de la tecnología y modelos estadísticos expertos, se utiliza la información proporcionada por los burós de información locales como herramienta para evaluar la capacidad de pago e inferir el perfil a través del recorrido que los clientes hacen en entidades financieras y comerciales. En este sentido ambas empresas han desarrollado productos específicos para el segmento, canales alternativos de comercialización y medios de pago.

Sobre los criterios para aceptar o denegar una solicitud a personas que solicitan crédito por primera vez en la entidad, se toma en cuenta: a) el nivel de riesgo del solicitante y el préstamo evaluado, b) la capacidad de pago del solicitante, c) los antecedentes en el sistema financiero, d) la metas comerciales que definen los niveles de aprobación necesario para alcanzarlas, y e) los objetivos de riesgo que definen los niveles de morosidad esperada que están dispuestos a aceptar en estas carteras.

Sobre los puntos (a), (b) y (c) ambas entidades utilizan criterios similares de evaluación, cuyo resultado es un mayor porcentaje de aprobación para los perfiles con menor nivel de riesgo, capacidad de pago suficiente para afrontar el pago de la cuota mensual y sin antecedentes negativos en el sistema financiero. Si bien en cada entidad utiliza distintos modelos y con diferentes ponderadores para la definición de los niveles de riesgo, podemos decir que en general los grupos menos riesgosos son mujeres, adultas, del interior del país, con alta estabilidad en el empleo, que a su vez son los grupos que presentan menor morosidad en el pago de las cuotas.

Por su parte, los puntos (d) y (e) presentan algunas diferencias. La entidad uruguaya fija sus metas comerciales y de riesgo en función de los resultados obtenidos y esperados principalmente en términos de ingresos, rentabilidad y participación en el mercado. En el caso paraguayo, al estar esta iniciativa de inclusión financiera enmarcada en un proyecto financiado y monitoreado por el BID, además de tener en cuenta los resultados de ingresos, rentabilidad y participación en el mercado, se agregan las metas establecidas en el proyecto de personas efectivamente incluidas al sistema financiero formal por medio de esta iniciativa. Esto implica que en la entidad financiera estén dispuestos a aceptar préstamos de niveles de riesgo mayores, y por tanto mayores niveles de morosidad, para cumplir con los objetivos de inclusión establecidos.

5. Diseño Metodológico

Para conocer los determinantes del acceso al crédito de la población de estudio trabajamos con la técnica multivariada Regresión Logística, la cual nos permite estimar las relaciones entre la variable a explicar y las variables independientes analizadas.

En este apartado se presenta la teoría de los modelos logísticos, así como los indicadores de poder discriminante utilizados en el análisis.

5.1. Modelo Logístico

La regresión logística binaria es un grupo de técnicas estadísticas que permiten comprobar hipótesis o relaciones causales de una variable dependiente dicotómica y nominal. En este trabajo el objetivo del modelo es adjudicar una probabilidad de exclusión (P_i) a cada persona (i) evaluada, a través de un modelo logístico que otorga una calificación de 0 al individuo incluido y 1 al excluido. Cuánto más cercano a uno es el valor, mayor la probabilidad de que la persona sea excluida. El modelo logístico se define de la siguiente manera:

$$Z_i = \alpha + \beta_j X_{ji}$$
$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta_j X_{ji})}}$$

Donde

- X_{ij} el valor que toman los j regresores (variables explicativas) del modelo para el individuo i ,
- β_j es el coeficiente asociado a la variable explicativa X_j ,
- α es la constante.

Como la variable dependiente está restringida entre cero y uno, la relación entre los regresores (X) y la variable dependiente no es lineal. Si tomamos el logaritmo natural de la razón de probabilidades obtenemos:

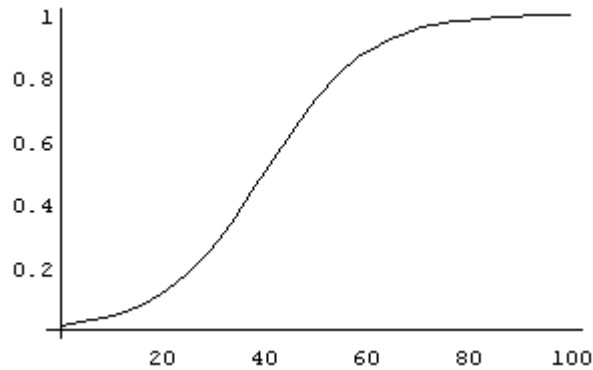
$$L_i = \ln\left(\frac{P_i}{1 - P_i}\right) = Z_i = \alpha_i + \beta X_i$$

Entonces, L_i resulta lineal en X_i y también en los Parámetros. Es decir, β es la pendiente y mide el cambio en L_i ocasionado por un cambio unitario en X_i , es decir, dice cómo el

logaritmo de las probabilidades de ser excluido cambia a mediada que X_i cambia en una unidad.

La forma típica de esta función es:

Gráfico 2: Función Logística



El eje de las ordenadas representa la probabilidad de pertenecer a uno de los dos grupos de interés: excluidos o incluidos. Si el coeficiente asociado a una variable explicativa es positivo, el valor en el polinomio es mayor y la probabilidad de exclusión más alta, es decir, hay un castigo asociado a dicha variable. En cambio, si el coeficiente asociado a una variable explicativa es negativo, la variable implica una disminución en la probabilidad de exclusión de la solicitud, es decir, hay un beneficio asociado a dicha variable.

Se utilizan dos tipos de variables en el modelo: Discretas y Piecewise. Cada tipo de variables es distinta en su naturaleza y en la forma en la que califican a la solicitud.

Discretas

Las variables discretas son aquellas que toman un conjunto finito de valores. Las variables discretas utilizadas pueden ser “originalmente” discretas (por ejemplo la variable estado civil, en la que se puede seleccionar una alternativa entre un grupo acotado de opciones) o variables que originalmente eran continuas pero fueron tramadas en rangos y por lo tanto “discretizadas”. Existe una categoría considerada base y el resto de las categorías son comparadas con la base. Por lo tanto, las categorías con coeficiente negativo se encuentran “favorecidas” ya que implican una menor probabilidad de ser excluido.

Continuas

Se multiplica el coeficiente del tramo por el valor que toma la variable. Entonces, si una variable tiene coeficiente asociado negativo, a mayor valor en la variable, menor será la probabilidad de ser excluido.

Piecewise

Las Variables Piecewise son un conjunto de variables construidas a partir de una variable continua original. El objetivo de utilizar estas variables es poder captar cambios de pendientes al interior de la variable continua. A partir de una variable continua se genera un conjunto de variables piecewise, cada uno representa a un tramo de la variable continua original.

Dado que son variables muy similares a las continuas (continuas por tramos), la forma de puntuar es análoga a la de una continua pero para cada tramo⁶.

5.2. Partición en muestras de Desarrollo y Prueba

Con el fin de lograr un modelo parsimonioso y reducir al mismo tiempo las posibilidades de sobreajuste de los datos utilizados para su estimación⁷, se divide la muestra seleccionada para el desarrollo del modelo en dos sub-muestras: muestra de *desarrollo* y muestra de *prueba*.

La muestra de prueba se utiliza para el *desarrollo* propiamente dicho del modelo. Específicamente, se utiliza para la selección de variables y el ajuste de los parámetros del modelo. La muestra de *prueba*, en cambio, se utiliza para la evaluación final del modelo con el fin de verificar si el modelo sigue prediciendo correctamente sobre datos nunca vistos durante el proceso de ajuste.

5.3. Importancia de las variables

Para calcular la importancia de variables en un modelo de regresión se utiliza como punto de partida el valor absoluto de t-value (resultante del modelo). Como esta estrategia sólo aplica a variables continuas, se realiza una extensión para variables categóricas utilizando el

⁶ Para más información del método de cálculo de las variables piecewise ver 'Anexo I - Cálculo de Betas para una Variables Piece-Wise'.

⁷ Se dice que un modelo presenta sobreajuste en los datos utilizados para el modelado cuando presente un muy buen ajuste sobre dichos datos pero un ajuste pobre sobre datos no vistos durante el proceso de modelización.

valor $\sqrt{\text{Wald}/df}$ donde Wald es el estadístico que informa la herramienta estadística y df son los grados de libertad de la variable⁸.

El uso del t-value se ve justificado porque su valor da el impacto típico de una variable continua x sobre el score, dado que $t\text{-value} = \beta * \delta(x)$, siendo $\delta(x)$, el desvío estándar de x. Es decir el t-value mide la variación del score dada una variación típica de la variable continua x, $\delta(x)$. Se toma el valor absoluto del t-value porque al medir la importancia de una variable no importa el signo del impacto.

El uso de $\sqrt{\text{Wald}/df}$ para medir la importancia de las variables categóricas, tiene que ver con la idea de medir el impacto promedio de la variable categórica sobre el score cuando la variable pasa del valor de referencia a otro determinado valor. El impacto de la variable depende de cuál es ese otro valor, y el objetivo es entonces medir el impacto promedio sobre los distintos valores posibles distintos al de referencia, de los cuales hay justamente "df".

5.4. Indicadores de Poder Discriminante

La bondad de los modelos se mide a través de 3 indicadores del poder discriminante: curva COR, K-S y GINI.

5.4.1. Curva COR

Para medir la capacidad discriminante del modelo, es decir, la capacidad de separar excluidos e incluidos, se utiliza la Curva COR que mide la eficiencia del modelo para aglutinar los casos deseados frente a los no deseados.

El eje denominado susceptibilidad acumula el porcentaje de los casos excluidos que también fueron excluidos por el modelo (aciertos). El eje de las abscisas indica el porcentaje de incluidos reales que fueron marcados como excluidos (erróneamente) por el modelo. La diagonal de 45 grados indica el resultado que surgiría de un modelo de aprobación aleatoria simple.

Cuanto mayor resulte la capacidad predictiva de un modelo, menor será la proporción de incluidos reales marcados como excluidos en el modelo, para cada nivel de excluidos reales

⁸ Notar que para variables continuas, $df = 1$ y $\sqrt{\text{Wald}/df} = \sqrt{\text{Wald}} \sim |t\text{-value}|$ (lo de " \sim " surge simplemente de que $\sqrt{\text{Wald}} = |z\text{-value}|$ (para un grado de libertad!) y que $t\text{-value} \sim z\text{-value}$ para grandes muestras).

y modelados. De aquí que cuanto mayor distancia entre la curva COR y la recta de 45 grados para un modelo dado, mayor capacidad predictiva habrá implícita. Es decir, cuanto más se acerque la curva al extremo superior izquierdo de la cuadrícula mayor será el poder predictivo del modelo.

El Área Bajo la Curva COR es la probabilidad de clasificar correctamente a los excluidos.

5.4.2. Kolmogorov-Smirnov (K-S)

El test de Kolmogorov-Smirnov es un test no paramétrico que compara si la distribución de una variable es la misma en dos muestras independientes, en este caso, la muestra de solicitantes excluidos y la muestra de solicitantes incluidos.

El test presenta la diferencia Extrema Absoluta, Positiva y Negativa observada entre la frecuencia acumulada de una muestra y la frecuencia acumulada de la otra muestra. Cuanto más grande sea esta diferencia mejor discriminará el modelo.

5.4.3. Coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad, que puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución. Se trata de un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a una perfecta igualdad y 1 a una absoluta desigualdad.

En el marco de este trabajo, un mayor coeficiente de Gini implica una mayor heterogeneidad en cuanto a la probabilidad de exclusión que el modelo les asigna a los individuos, lo cual significa una mayor segmentación.

6. Análisis Descriptivo

El análisis descriptivo se realiza sobre 231.716 solicitudes de crédito tomadas en el marco de las iniciativas de inclusión financiera durante junio de 2012 y junio de 2013; 116.112 solicitudes correspondientes a la entidad uruguaya, y 115.604 a la entidad paraguaya.

Para contrastar la distribución de las variables analizadas en este trabajo con la distribución de la población de Paraguay y Uruguay, se analizan los resultados de la encuesta continua de hogares para personas entre 18 y 75 años de edad, y se comparan los resultados de ambos países.

La distribución por sexo es similar en ambos países, las mujeres representan el 51% de la población objetivo de Uruguay y el 54% de Paraguay.

La pirámide poblacional tiene una estructura diferente en los grupos observados, la población Uruguaya es más envejecida en relación a Paraguay, En Paraguay se acumula el 39% de los casos en menos de 32 años, mientras que para Uruguay a este rango se acumula el 28%. En el otro extremo de la pirámide, se observa una acumulación del 24% para personas con más de 51 años, y un 35% para Uruguay, En el rango 32 a 51 años, la distribución es similar, 37% en Paraguay y 38% en Uruguay.

La diferencia por zonas es notoria entre ambos países. Uruguay tiene una mayor concentración en la zona metropolitana que Paraguay (14% y 39% respectivamente).

6.1. Características sociodemográficas

En el análisis comparativo por entidad de las variables sexo, edad, zona geográfica y ocupación por entidad, observamos que en ambos países la cantidad de mujeres que solicitan el tipo de crédito estudiado es mayor que los hombres, incluso mayor teniendo en cuenta la relación hombre-mujeres que se observa en el total de la población.

En términos comparativos entre las entidades de ambos países, en Paraguay se observa mayor acumulación de solicitantes jóvenes - personas con hasta 30 años de edad representan el 48.9% del total de solicitantes en Paraguay, y un 36.3% en Uruguay. En Uruguay destaca la mayor acumulación en solicitantes adultos mayores – personas con más de 50 años de edad son el 20.7% de los solicitantes Uruguayos, y 11.9 en Paraguay). Esta tendencia se

mantiene si comparamos la relación entre la distribución por edad entre los solicitantes y el total de la población analizada de cada país.

En cuanto a la zona, la distribución de solicitantes es similar en ambos países, aunque no lo es la distribución del total de la población. En Paraguay la mayor participación de solicitantes es en zona metropolitana – 55.3%, mientras que en el total de la población estudiada es menor al 10%. En Uruguay, si bien la participación de solicitantes de zona metropolitana es mayor a la del total de la población, la diferencia es menos significativa – 56.3% de solicitantes de zona metropolitana, y 41.3% de la misma zona para el total de la población.

Para la clasificación de ocupación se parte del esquema de clases desarrollado por Marcelo Boado (2008). Ésta propone una clasificación de ocho estratos sociales en función de las posiciones socio-ocupacionales de los individuos:

- ***Empresarios / Directores***: empresarios, directores de empresas, altos funcionarios públicos (EDAF).
- ***Profesionales***: profesionales universitarios en función específica (PROFU).
- ***Pequeños empresarios***: propietarios de establecimientos medianos y pequeños (urbanos o rurales) (PROESTA).
- ***Cuadros medios***: técnicos, cuadros medios, docentes, supervisores (TECDOSUP).
- ***Administrativos***: empleados administrativos, vendedores, agentes (EAV).
- ***Trabajadores especializados*** (TRAESP).
- ***Trabajadores no especializados*** (TRANOES).
- ***Empleados domésticos*** (EDOM).

Tabla 2: Distribución de Variables Sociodemográficas en Casos de Estudio

Variables		Entidad		
		Paraguay	Uruguay	Total
		% Total	% Total	% Total
Sexo	Femenino	61,9%	55,9%	58,9%
	Masculino	38,1%	44,1%	41,1%
Edad	> 17 y <= 21	8,9%	10,6%	9,7%
	> 21 y <= 26	22,4%	12,5%	17,4%
	> 26 y <= 31	17,6%	13,2%	15,4%
	> 31 y <= 36	13,2%	12,6%	12,9%
	> 36 y <= 41	9,7%	11,2%	10,4%
	> 41 y <= 46	8,6%	9,9%	9,3%
	> 46 y <= 51	7,6%	9,3%	8,4%
	> 51 y <= 56	6,1%	7,7%	6,9%
	> 56 y <= 61	3,9%	5,5%	4,7%
	> 61 y <= 70	1,9%	5,4%	3,6%
	> 70	,0%	2,2%	1,1%
Estado Civil	Soltero	65,9%	30,9%	48,3%
	Casado	15,8%	28,9%	22,4%
	Union Libre -	17,2%	26,0%	21,6%
	Divorciado	,3%	11,5%	5,9%
	Viudo	,9%	2,7%	1,8%
Zona	Zona Metropolitana	55,3%	56,3%	55,8%
	Interior	44,7%	43,7%	44,2%
Ocupación	Empresarios / Directores	,0%	0,2%	0,1%
	Profesionales	,4%	1,4%	0,9%
	Pequeños empresarios	10,3%	6,6%	8,5%
	Cuadros Medios	3,2%	2,8%	3,0%
	Administrativos	19,1%	9,5%	14,3%
	T. Especializados	16,6%	12,8%	14,7%
	T. NO Especializados	16,7%	17,7%	17,2%
	Empleados domésticos	11,5%	12,3%	11,9%
	Sin Relación Laboral	,2%	15,2%	7,7%
	Sin Identificar	21,7%	21,6%	21,7%
Total		100,0%	100,0%	100,0%

FUENTE: NAT, AGOSTO 2013. SOLICITUDES DE CRÉDITO DE NO BANCARIZADOS PARAGUAY Y URUGUAY.

6.2. Nivel de Inclusión

En el siguiente cuadro se muestra para cada variable el porcentaje de incluidos en cada entidad. Se consideran incluidos aquellas personas que efectivamente tuvieron acceso al crédito solicitado.

Tabla 3: Nivel de Inclusión por Variables Sociodemográficas

Variables		% Incluidos		
		Paraguay	Uruguay	Total
Sexo	Femenino	64,7%	49,1%	57,3%
	Masculino	65,1%	42,8%	53,1%
Edad	> 17 y <= 21	54,8%	9,2%	30,0%
	> 21 y <= 26	57,8%	21,8%	44,9%
	> 26 y <= 31	63,7%	43,7%	55,1%
	> 31 y <= 36	67,1%	49,8%	58,6%
	> 36 y <= 41	69,1%	53,9%	61,0%
	> 41 y <= 46	72,0%	58,4%	64,7%
	> 46 y <= 51	72,1%	61,6%	66,3%
	> 51 y <= 56	72,2%	62,6%	66,9%
	> 56 y <= 61	73,0%	63,5%	67,4%
	> 61 y <= 70	67,7%	63,0%	64,2%
> 70	12,2%	64,0%	63,0%	
Estado Civil	Soltero	66,2%	33,5%	55,7%
	Casado	65,1%	59,2%	61,3%
	Union Libre - Amancebado	58,6%	42,0%	48,6%
	Divorciado	67,9%	55,1%	55,4%
	Viudo	76,4%	59,6%	63,6%
Zona	Zona Metropolitana	58,4%	43,8%	51,0%
	Interior	72,8%	49,5%	61,3%
Ocupación	Empresarios / Directores	18,2%	52,0%	50,2%
	Profesionales	72,7%	55,9%	59,8%
	Pequeños empresarios	75,0%	56,9%	67,9%
	Cuadros Medios	71,4%	56,4%	64,5%
	Administrativos	68,9%	43,9%	60,6%
	T. Especializados	72,3%	48,1%	61,8%
	T. NO Especializados	70,2%	37,9%	53,5%
	Empleados domésticos	71,0%	51,0%	60,7%
	Sin Relación Laboral	73,8%	52,3%	52,6%
	Sin Identificar	42,0%	41,1%	41,6%
Total		64,8%	46,3%	55,6%

FUENTE: NAT, AGOSTO 2013. SOLICITUDES DE CRÉDITO DE NO BANCARIZADOS PARAGUAY Y URUGUAY.

Del total de solicitantes en ambas entidades el 55.6% se llevó el crédito solicitado. En este sentido el nivel de inclusión es mayor en la entidad paraguaya que en la uruguaya (64.8% y 43.3% respectivamente).

En Uruguay el porcentaje de incluidos es mayor en mujeres que en hombres, mientras que en Paraguay los niveles son similares por género.

En cuanto a la edad, en ambas entidades se observa que a mayor edad mayor inclusión, en Paraguay con mayor nivel de inclusión general. En Uruguay hay mayores diferencias entre

grupos, especialmente entre los primeros tramos de edad donde el salto es mayor de un grupo a otro.

Al observar la zona, vemos que en ambos países la zona metropolitana tiene mayor nivel de inclusión que el interior.

Con excepción de las ocupaciones sin identificar, en Paraguay no hay mayores diferencias en los niveles de inclusión por ocupación. Por su parte en Uruguay sí destacan dos grupos por su menor nivel de inclusión: trabajadores no especializados y administrativos.

7. Modelos Explicativos

El análisis de las relaciones entre las variables se realizara a través de la técnica de análisis discriminante *regresión logística binaria* donde la variable dicotómica a explicar es incluido / excluido. El método utilizado para la construcción de los modelos es de incorporación secuencial de variables *paso a paso*, eliminando los regresores no significativos de los modelos finales. La base de la entidad paraguaya (115.604 personas) y la base de la entidad uruguaya (116.112 personas), se dividen en forma aleatoria en 2 grupos: base de desarrollo con el 80% de los casos y base de prueba con el restante 20%.

Sobre la base de desarrollo se generan 8 regresiones (4 para cada país), utilizando aquellas variables que, según lo observado en el análisis descriptivo, son pertinentes para explicar los niveles de inclusión financiera. La evaluación de la bondad de ajuste de los modelos se realiza sobre la base de prueba y se comparan los resultados de los indicadores de poder discriminante: área bajo la curva COR, K-S y Gini:

Tabla 4: Indicadores de Poder Discriminante

Indicadores de Poder Discriminante	Paraguay				Uruguay			
	Modelo p1	Modelo p2	Modelo p3	Modelo p4	Modelo u1	Modelo u2	Modelo u3	Modelo u4
Área bajo la curva COR	0,6204	0,6780	0,6713	0,6741	0,7013	0,7003	0,6984	0,7046
K-S	0,1789	0,2622	0,2584	0,2608	0,3066	0,3094	0,3070	0,3120
GINI	0,1772	0,2636	0,2526	0,2522	0,1998	0,2088	0,2034	0,2077

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En la comparación los modelos p4⁹ y u4 son los que presentan mejor bondad de ajuste para la entidad paraguaya y uruguaya respectivamente. También se observa que el modelo u4 de la entidad uruguaya, tiene mejor poder discriminante que el modelo p4 de la entidad paraguaya.

Del total de variables analizadas en la regresión, el estado civil no fue incluido en los modelos finales en ambos países, por presentar alta correlación con la edad; sí entran en ambos modelos: sexo, edad, zona y ocupación.

⁹ En el caso de Paraguay, si bien el modelo con mejor bondad de ajuste es el p2, se descarta como modelo final ya que incluye la variable Estado Civil, que, cómo se explica posteriormente, tiene una alta correlación con la edad.

Tabla 5: Variables y betas en la Ecuación

Variables		Paraguay	Uruguay
		beta	
Sexo	Femenino	-	-
	Masculino	0,0513	0,1969
Zona	Zona Metropolitana	-	-
	Interior	- 0,5941	- 0,2885
Edad	> 17 y <= 21	- 0,2790	- 0,1870
	> 21 y <= 26	- 0,0286	- 0,2785
	> 26 y <= 31	- 0,0672	- 0,1190
	> 31 y <= 36	-	- 0,0213
	> 36 y <= 41	- 0,0350	- 0,0431
	> 41 y <= 46	- 0,0193	- 0,0302
	> 46 y <= 51	- 0,0200	- 0,0175
	> 51 y <= 70	0,0180	- 0,0103
Ocupación	Empresarios / Directores	-	-
	Profesionales	- 2,2547	- 0,2005
	Pequeños empresarios	- 2,2635	- 0,1872
	Cuadros Medios	- 2,2139	- 0,2048
	Administrativos	- 2,2116	- 0,1539
	T. Especializados	- 2,2979	- 0,1216
	T. NO Especializados	- 2,1843	0,1760
	Empleados domésticos	- 2,2900	- 0,0302
	Sin Relación Laboral	- 2,1366	0,1112
	Sin Identificar	- 1,0666	0,0760
Constante	Constante	3,0863	2,8516

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Una primera interpretación de los resultados de las regresiones finales es analizando el signo de los coeficientes, que da información si la probabilidad aumenta o disminuye.

En los 2 modelos los β de las variables tienen el mismo sentido, tiene mayor probabilidad de ser excluidos los hombres y los residentes de zonas metropolitanas. A medida que aumenta la edad, disminuye la probabilidad de ser excluido.

En relación a la pauta ocupacional los resultados difieren entre países. En la entidad paraguaya no hay mayores variaciones en la probabilidad de ser excluido por ocupación. Por su parte, en la entidad uruguaya las categorías empresarios / directores, pequeños empresarios y cuadros medios son las que tienen menor probabilidad de ser excluidas. En el otro extremo, trabajadores no especializados y personas sin relación laboral son quienes presentan mayor probabilidad de ser excluidos.

Al aplicar el logaritmo natural de la función obtenida en el modelo, obtenemos un valor entre 0 y 1 que indica la probabilidad que la solicitud de crédito sea rechazada.

Tabla 6: Ejemplo aplicación

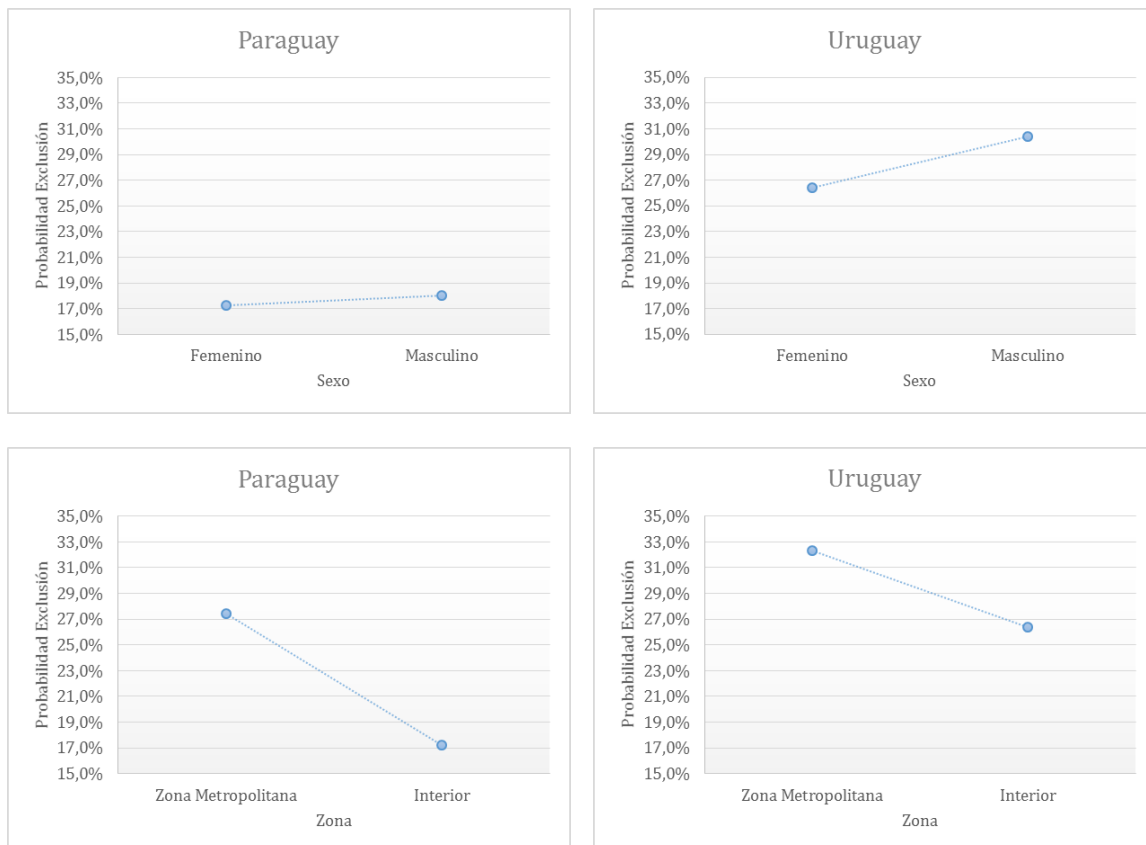
Variable	Valor	Paraguay	Uruguay
		beta	
Sexo	Femenino	-	-
Zona	Interior	- 0,5941	- 0,2885
Edad	60	- 1,8049	- 3,3887
Ocupación	Profesionales	- 2,2547	- 0,2005
Constante		3,0863	2,8516
Z		- 1,5675	- 1,0261
Probabilidad Excluido		17,3%	26,4%

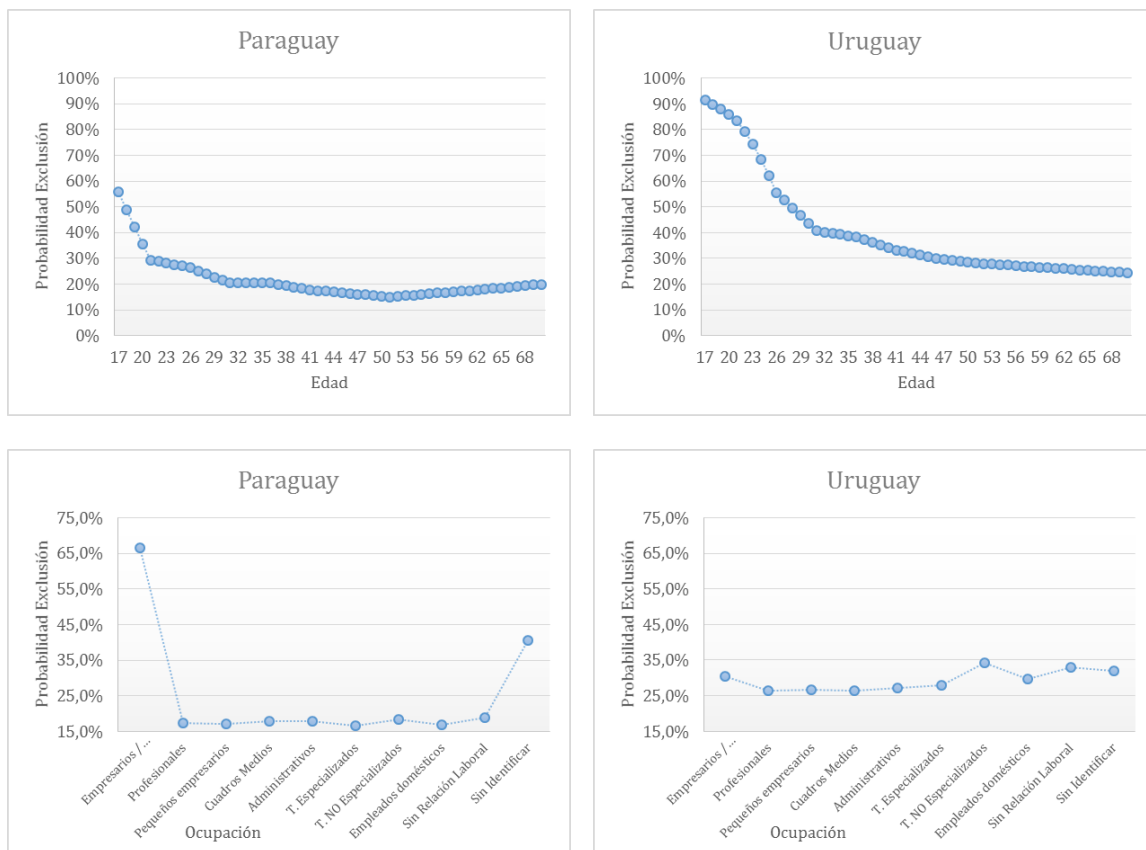
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En la tabla 6 vemos que una solicitante mujer, del interior, de 60 años de edad, que ejerce como profesional, tendría una probabilidad de ser excluida del acceso al crédito de 17,3% en la entidad paraguaya, y de 26,4% en la uruguaya.

Tomando como referencia este ejemplo, en los siguientes gráficos vemos cómo varía la probabilidad de exclusión de una solicitud cuando cambia sólo una de las variables que componen la ecuación.

Tabla 7: Ejemplo variación Probabilidad Exclusión





FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Si el solicitante es de sexo femenino la probabilidad de ser excluido (PE de aquí en más) es la del ejemplo presentado en la tabla 6: 17.3% en la entidad paraguaya y 26.4% en la uruguaya. Manteniendo constantes el resto de las variables, si el solicitante es de sexo masculino, en ambos casos la PE aumenta, en el caso paraguayo pasa a 18% y en el uruguayo a 30.4%.

Si el lugar de residencia del solicitante es zona metropolitana, la PE aumenta, 10 puntos porcentuales en Paraguay y 5 en Uruguay.

En el caso de la edad, la PE aumenta a medida que ésta disminuye. En el modelo paraguayo a los 18 años de edad la probabilidad se sitúa en 49%, este valor disminuye con una pendiente más pronunciada de los 18 a los 20 años y continúa disminuyendo, aunque en menor escala en de los 21 a los 50 años, llegando a una PE de 15% a esta edad. A partir de los 51 años de edad se revierte levemente la relación PE-Edad, aumentando la primera un 0.3% por cada año adicional del solicitante, llegando a una PE de 24.4% a los 70 años de edad.

En el modelo uruguayo la PE inicia en 89.8% a los 18 años, con una pendiente negativa muy pronunciada hasta los 30 años, donde la PE se sitúa en 43.7%. A partir de esta edad la PE

continúa bajando a medida que aumenta la edad, a razón de 0.4% por cada año adicional, llegando a una PE de 24.4% a los 70 años de edad.

Finalmente, tal como observamos en el análisis de los signos del β de los modelos, las variaciones de la PE cuando cambia la ocupación son moderadas. En el caso paraguayo las mayores diferencias se dan si la ocupación es ‘empresarios / directores’ y ‘sin identificar’, donde la PE llega a 66.5% y 40.6% respectivamente, el resto de las categorías mantienen una PE promedio de 17.6%. En el caso uruguayo se despegan del promedio ‘trabajadores no especializados’, ‘empleados domésticos’, ‘sin relación laboral’ y casos sin identificar, con una PE promedio de 30%.

Otra forma de analizar los resultados, es medir la importancia de cada variable en la ecuación. En el modelo paraguayo la variable *zona* es la que explica en mayor medida los niveles de exclusión (38%), seguido por la edad y la ocupación (ver *Tabla 7: Importancia de las variables por modelo*). En el caso uruguayo la edad es la variable más explicativa (63,9%), especialmente en los primeros tramos etarios (46,4% para los grupos hasta 30 años), seguido por la zona con una importancia sensiblemente menor a la observada en el modelo paraguayo.

Tabla 8: Importancia de las Variables por Modelo

Variables	Paraguay	Uruguay
	Importancia de la Variable	
Sexo	3,1%	11,3%
Zona	38,4%	18,7%
Ocupación	22,6%	6,1%
Edad	35,9%	63,9%
> 17 y <= 21	7,7%	6,7%
> 21 y <= 26	4,1%	25,3%
> 26 y <= 31	11,8%	14,4%
> 31 y <= 36	0,0%	2,6%
> 36 y <= 41	4,6%	5,2%
> 41 y <= 46	1,8%	3,4%
> 46 y <= 51	1,9%	2,2%
> 51 y <= 70	3,9%	4,2%
Total	100,0%	100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Al analizar los resultados por zona hay que tener en cuenta que para el caso Paraguayo hay una sub representación de solicitudes de crédito para los habitantes del interior, que representan el 90% de la población mayor de 17 años del país, y que sólo representan el 44% de las solicitudes de crédito analizadas. Por lo tanto, deberíamos considerar que la población del interior tiene menor probabilidad de solicitar un crédito, sin embargo, los que sí tienen acceso a iniciar una solicitud tienen menor probabilidad de ser excluidos que los residentes en zonas metropolitanas.

8. Conclusiones

En América Latina en general, y Paraguay y Uruguay en particular, se identifican como grupos vulnerables en términos de desigualdad de oportunidades, a los jóvenes, mujeres, residentes en zonas rurales, sub urbanas y urbanas de barrios marginales, desocupados, trabajadores informales y ocupados no calificados.

Las brechas por edad que separan los grupos vulnerables y el resto de la población se reproducen en los patrones de desigualdad observados en las 2 iniciativas de inclusión financiera estudiadas, a menor edad mayor probabilidad de ser excluido. El peso de la edad para explicar la probabilidad de inclusión financiera es mayor en Uruguay que en Paraguay.

No se observan desigualdades de género en el acceso a servicios financieros formales, incluso la balanza parece inclinarse a favor de las mujeres, que tienen mayor probabilidad que los hombres de acceder a un crédito en ambas entidades.

En términos de inclusión financiera, en Uruguay los residentes en zonas metropolitanas tienen mayor probabilidad de ser excluidos que los habitantes del interior. Por su lado, en el estudio del caso Paraguayo podemos afirmar que la población del interior tiene menor probabilidad de solicitar un crédito, sin embargo, los que sí tienen acceso a iniciar una solicitud tienen menor probabilidad de ser excluidos que los residentes en zonas metropolitanas.

En el caso uruguayo la ocupación también refleja desigualdades en el acceso al crédito, siendo las personas sin relación laboral y los trabajadores no especializados quienes presentan mayor probabilidad de ser excluidos, mientras que en el caso paraguayo no se observan mayores diferencias en esta variable.

Se observa una relación directa entre el nivel de riesgo esperado de los solicitantes y la probabilidad de ser excluidos del acceso al crédito. Donde los grupos menos riesgosos son mujeres, adultas, del interior del país, con estabilidad en el empleo.

Los países estudiados están en los dos extremos de las clasificaciones de desigualdad de oportunidades, mientras Paraguay está entre los países más pobres de América Latina con una alta concentración del ingreso y en un proceso de transición demográfico moderado, Uruguay se presenta como uno de los países con menores niveles de desigualdad de la región

por sus bajos niveles de pobreza e indigencia, baja concentración del ingreso y en un avanzado estado de transición demográfica. No obstante, en relación al entorno nacional para la inclusión financiera, Paraguay y Uruguay están en condiciones similares.

Las iniciativas analizadas en este trabajo nos permiten concluir que los niveles de exclusión son mayores en Uruguay que en Paraguay, del total de solicitantes de crédito el primero tiene una inclusión real del 43,3%, y el segundo de 64,8%. Sobre este punto parece influir el tipo de compromiso empresarial y social de las entidades estudiadas. En la entidad uruguaya se fijan las metas comerciales y de riesgo en función de los resultados obtenidos y esperados principalmente en términos de ingresos, rentabilidad y participación en el mercado. En el caso paraguayo se comparten este tipo de metas, al tiempo que se tienen en cuenta los objetivos de personas efectivamente incluidas al sistema financiero formal.

De estas observaciones también podemos concluir que, por un lado los procesos estudiados para la inclusión financiera amplían la cantidad de personas que se incorporan al sistema financiero formal y revierten la situación de desventaja comparativa de algunos grupos típicamente desfavorecidos. Al mismo tiempo, en términos generales reproducen los mecanismos de exclusión social observados en el ámbito socio-económico y laboral, es decir, los grupos vulnerables tienen menores niveles de inclusión que el resto de la población. Esto genera un desplazamiento de la curva de inclusión a un nivel mayor, pero no modifica sustancialmente su forma.

En este sentido sería oportuno analizar un abordaje de inclusión financiera donde los grupos socialmente vulnerables y de mayor riesgo para las entidades, tengan acceso a herramientas de educación financiera, consumo responsable, así como asesoramiento profesional en caso de tener dificultades para afrontar los pagos de los créditos otorgados.

Esto implicaría que el solicitante pueda tomar decisiones ajustadas a sus necesidades de financiamiento y posibilidades de pago en condiciones estables. Y que en caso de imprevistos cuenten con opciones de refinanciación o reestructuración de deuda acordes a las posibilidades existentes en el nuevo escenario.

Por su lado, las entidades financieras estarían en condiciones de redefinir los criterios de morosidad para asignar los perfiles de riesgo, donde lo que se evalúa no es el pago en tiempo y forma de los reembolsos acordados en la situación inicial, sino la voluntad de pago aún en

tiempos de dificultad y el cumplimiento de los nuevos compromisos convenidos por el solicitante y la entidad.

Con este tipo de mecanismos se podría analizar la posibilidad de modificar la estructura de comportamiento de pago de los solicitantes y con esto los patrones de desigualdad en el acceso al crédito, y por ende avanzar en la disminución de la desigualdad social.

Bibliografía

AEBU (2009) *Propuesta del Consejo Central: Una banca al servicio del interés nacional sigue siendo un asunto de Estado*. Documento de la Asamblea Nacional de Delegados. Disponible en www.aebu.org.uy.

AEBU (2010). *Propuestas para la Inclusión Financiera*. Documento de la Comisión Técnica Asesora. Disponible en www.aebu.org.uy.

AEBU (2011). *Observatorio del Sistema Financiero*. www.aebu.org.uy.

ASBA (2012) *Cómo aportar a la inclusión financiera. Inventario de productos y servicios disponibles en la región*.

ASOBANCARIA (2012) *Informe de Inclusión Financiera Colombia 2012*. Zetta Comunicaciones, Bogotá.

ATKINSON, A.B., CANTILLON, B., MARLIER, E. & NOLAM, B. (2002) *Social Indicators. The EU and Social Inclusion*. Oxford University Press, Oxford.

ATRAIA, R. (2004) *Estructura ocupacional, estructuras sociales y clases sociales*. CEPAL/División de Desarrollo Social, Santiago de Chile.

BANCO MUNDIAL (2010) *Paraguay, Estudio de Pobreza. Determinantes y desafíos para la reducción de la pobreza*. Documento del Banco Mundial, Washington.

BANCO MUNDIAL (2014) *Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion (Informe sobre el desarrollo financiero mundial 2014: Inclusión financiera)*. Documento del Banco Mundial, Washington.

BATTHYANY, K. (2014) *Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad en Uruguay. Fascículo 5: Desigualdades de Género en Uruguay*. TRILCE, Montevideo.

BBVA Research (2014) *Una mirada a la inclusión financiera en Paraguay*. BBVA Research, Observatorio Económico. Disponible en www.bbvarsearch.com.

BID (2013) *Proyecto PRL1074: Banco Familiar - Inclusión Financiera de la Base de la Pirámide mediante Banco Interamericano de Desarrollo*. Disponible en www.iadb.org

BOADO, M. (2008) *Movilidad social en el Uruguay contemporáneo*. IUPERJ/UDELAR, Montevideo.

CAF (2011) *Servicios Financieros para el desarrollo: Promoviendo el acceso en América Latina*. Disponible en www.caf.com.

CAF (2014) *Microscopio Global 2014. Análisis del entorno para la inclusión financiera*. Disponible en www.caf.com.

CALVO, J. (2013) *Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad en Uruguay. Fascículo 1: Las Necesidades Básicas Insatisfechas a partir de los Censos 2011*. TRILCE, Montevideo.

CALVO, J. (2014) *Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad en Uruguay. Fascículo 4: Jóvenes en Uruguay: demografía, educación, mercado laboral y emancipación*. TRILCE, Montevideo.

CEPAL (2012) *Panorama social de América Latina*. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile.

CEPAL (2012) *Panorama social de América Latina*. Santiago de Chile. Disponible en www.eclac.org.

COSIO ZAVALA, M. (2014) *Demografía, pobreza y desigualdades*. Disponible en halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00968878.

CPA Ferrere (S/D) *Inclusión Financiera en Uruguay y el papel de las instituciones financieras no bancarias*. Disponible en www.cpa ferrere.com.

DEMENTESX (2014) *Paraguay: Crecimiento económico y desigualdad*. Disponible en www.dementesx.com.

DGEEC Paraguay (2013) *Anuario Estadístico 2012*. DGEEC, Asunción.

DGEEC Paraguay (2013) *Encuesta Continua de Hogares*. Microdatos 2013.

ERRANDONEA, A. (h) (1989) *Las clases sociales en el Uruguay*. CLAEH/Banda Oriental, Montevideo.

FANELLI, J.M. (2012) *Crecimiento y Equidad en Paraguay*. CEDES, Buenos Aires.

FERNÁNDEZ, A., PERERA, M. (2004) *Índice de niveles Socio-Económicos (INSE). Informe final*. CPA Ferrere Consultores, Montevideo.

FERNÁNDEZ, T., LONGHI, A. (2002) *Dinámica y determinantes de la pobreza. El caso de Uruguay entre 1991 y 2000*. UDELAR, FSC, Departamento de Sociología, Informe de Investigación n° 31, Montevideo.

- FIGUEROA, A., ALTAMIRANO, T., SULMONT, D. (1996) *Exclusión social y desigualdad en el Perú*. OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima.
- FILARDO, V. (2011) *Puede y debe rendir más. Educación: un mundo de distancias*. Montevideo: Cotidiano Mujer.
- FOMIN, BID, CAF (2012) *Implementación de plan de inclusión financiera en Paraguay. Tecnologías para la Inclusión Financiera*. Disponible en www.fomin.org/tecin.
- INE Uruguay (2013) *Encuesta Permanente de Hogares*. Microdatos 2013.
- KAZTMAN, R. (1999) (coord.) *Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en el Uruguay*. PNUD-CEPAL, Montevideo.
- MIDES, OPP Uruguay (2013) *Reporte Social 2013: Principales características del Uruguay social*. MIDES, OPP, Montevideo.
- MINISTERIO DE HACIENDA Paraguay (2014) *Encuesta sobre Inclusión Financiera. Resultados Finales*. Disponible en www.hacienda.gov.
- MINISTERIO DE HACIENDA Paraguay (2014) *Paraguay: National Financial Inclusion Strategy 2014*. Disponible en www.hacienda.gov.
- NAT CONSULTORES (2013) *Solicitudes de crédito de no bancarizados – Paraguay y Uruguay*. Documento interno. www.natconsultores.com.
- ODDONE, G. (2011). *Desafíos de la Inclusión Financiera en Uruguay*. CPA Ferrere, Montevideo.
- PARAGUAY DEBATE (2014) *Desigualdad social y lucha contra la pobreza*. Debate, revista digital de políticas públicas. Disponible en www.paraguaydebate.org.py.
- RIELLA, A. et al. (S/D) *Índice primario de Nivel socio económico. Comisión agrupada de nivel socio económico*. ADIMU/AUDAP/Cámara de Anunciantes del Uruguay, Montevideo.
- ROJAS SUAREZ, L. (2007) *Promoviendo el acceso a los servicios financieros: ¿qué nos dicen los datos sobre bancarización en América Latina?* FELABAN, Ciudad de México.
- SÁNCHEZ TAM, L. (2003) *Exclusiones, desigualdades y pobrezas. Multidimensiones, multirelaciones y taxonomías*. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, Escuela de graduados, Maestría en Sociología, Lima.

SERNA, M. (2005) (coord.) *Exclusión y vulnerabilidad social: qué hay de nuevo en los debates contemporáneos*. Red Temática Desarrollo, Desigualdad y Protección Social en Uruguay – DS-FCS-UDELAR. En *Vulnerabilidad y exclusión. Aportes para las políticas sociales*. MIDES, Montevideo.

SIG-INMUJERES (2013) *Estadísticas de Género 2012. La importancia de los ingresos personales en la equidad*. Disponible en www.inmujeres.gub.uy.

TERCEIRO, J. (2006) *Sobre la Desigualdad*. Disponible en www.racmyp.es/docs/anales/A83/A83-7.pdf.